

IV. HECHOS Y DOCUMENTOS

ANA TERESA VINCENTELLI (1944j. Lic. en Historia. Es colaboradora del CEA.

Cronología de las relaciones Estados Unidos-América Latina durante 1984
Resumen de los principales acontecimientos de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante 1984
Enero-Marzo

CENTROAMÉRICA NICARAGUA

El 17 de enero el ministro de Defensa de Nicaragua, Humberto Ortega, denunció en conferencia de prensa que las maniobras militares “Pino Alto III” constituyen una amenaza directa a su país. Al analizar la situación militar por la que atraviesa Nicaragua, Ortega recordó los resultados de los ejercicios que se realizan en el país vecino, denominados “Pino Alto II”, que han sido utilizados para la construcción o ampliación de aeropuertos y bases militares en Honduras.

Comentó que las nuevas maniobras se realizarán en el área del Pacífico centroamericano. En ellas participarán tropas hondureñas, norteamericanas, salvadoreñas y posiblemente guatemaltecas. Estas maniobras son un hecho extraordinariamente grave, dijo, porque se trata de situar a miles de militares estadounidenses cerca del área estratégica nicaragüense

Ortega subrayó que el peligro de una invasión no es retórico, sino un peligro real por los miles de militares que se encuentran en Honduras, la presencia de fragatas norteamericanas en el Pacífico y el Atlántico en labores de espionaje y la exploración de sus aviones.

“No estamos proyectando un panorama bélico”, recalcó, “sino que es una realidad impuesta por los Estados Unidos”,

El 3 de febrero, cinco aviones de combate procedentes de Honduras atacaron zonas del Departamento noroccidental de Chinandega. En la noche del día anterior se había producido un ataque similar. Dada la gravedad del asunto, Nicaragua pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar la adopción de medidas encaminadas a evitar que tales hechos se repitieran.

A finales del trimestre se combinaron los ataques masivos al territorio nicaragüense por la contrarrevolución, el minado de sus puertos, los ataques de lanchas rápidas y la incursión de aviones contra objetivos económicos y militares.

El 20 de marzo un buque soviético que transportaba petróleo para Nicaragua chocó con una mina a la entrada de Puerto Sandino, a unos 70 km al oeste de

Managua, en la Costa del Pacífico. La explosión de la misma causó daños en el tanquero y heridas a miembros de su tripulación.

Al fin del trimestre, como saldo de estas operaciones, resultaron averiados cuatro grandes buques mercantes: soviético, panameño, libio y japonés, lo que pone en peligro las operaciones comerciales de Nicaragua.

La ofensiva contrarrevolucionaria estuvo a punto de convertirse en un conflicto generalizado en el área, por la acción misma de la contrarrevolución, el amplio apoyo de los Estados Unidos y la participación de comandos especializados entrenados por la CIA para efectuar el minado de los puertos y el ataque de las lanchas piratas.

Con estos hechos, la política norteamericana hacia Nicaragua evidenció su agresividad en la que la amenaza y el chantaje constituyen una constante. Ante esta situación el gobierno nicaragüense asumió una actitud más enérgica ante el Grupo de Contadora, y el propio 21 de marzo, desde la ciudad de México, pidió una gestión de emergencia del Grupo para frenar la escalada militarista estadounidense en Centroamérica y evitar la intervención norteamericana directa.

El 26 de marzo, el gobierno de Nicaragua reiteró ante los gobiernos de Contadora la urgencia de realizar gestiones extraordinarias que detuvieran el agravamiento de la crisis en Centroamérica.

El 27 de marzo, el gobierno de Nicaragua denunció ante la organización de Naciones Unidas (ONU) el recrudecimiento de la guerra no declarada de los Estados Unidos contra su territorio. Una declaración distribuida por la misión nicaragüense ante esta organización internacional afirmó que el aumento de la presencia militar norteamericana en Honduras es un factor de extrema gravedad que afecta el proceso de Contadora y amenaza la seguridad de los países de la región.

A fines de marzo, la situación creada por el minado de los puertos nicaragüenses había llegado a su punto culminante. La presencia norteamericana en la región, el aumento de las acciones contrarrevolucionarias contra Nicaragua por las bandas que operan desde Honduras y Costa Rica apoyadas por los Estados Unidos, unido a la campaña norteamericana de reivindicar el uso de las tropas de ese país en acciones externas como opción de su política exterior, incidieron en la negativa de la Cámara de Representantes norteamericana en el sentido de aprobar la solicitud de 21 millones de dólares para la contrarrevolución nicaragüense.

EL SALVADOR

Durante el trimestre, en distintas acciones de envergadura, la guerrilla salvadoreña propugnó duros golpes al ejército salvadoreño. Los éxitos militares del FMLN incidieron notablemente en la moral de combate del

enemigo, especialmente las acciones de Cuscatlán y el Paraíso. Estas acciones causaron preocupación entre los militares y civiles. Sin embargo, el ejército salvadoreño logró recuperarse de los duros golpes recibidos y reagruparse para poder garantizar las elecciones que se celebraron durante el mes de marzo. El FMLN-FDR ha desplegado una importante actividad político-diplomática e hizo pública su propuesta alternativa a las elecciones con la proposición de un gobierno de amplia participación.

La propuesta encontró complacencia en algunos sectores políticos, sociales y eclesiásticos. Igualmente, en el Grupo de Cantadora y algunos gobernantes y fuerzas políticas internacionales. Sin embargo, en los Estados Unidos prevaleció la negativa a toda negociación con el FMLN-FDR y el mantenimiento de su proyecto militar para ese país y el área en general.

La representación político-diplomática del FMLN-FDR intensificó sus contactos con dirigentes del Grupo de Cantadora, con el fin de impulsar la propuesta negociadora y de incluir el problema salvadoreño en la agenda de trabajo, sin que dichos esfuerzos tuviesen resultados positivos.

Hay que destacar, por otra parte, la actividad desplegada por el Ejecutivo norteamericano de su solicitud al Congreso de la aprobación de fondos adicionales para El Salvador. En este sentido, el presidente norteamericano, Ronald Reagan, envió al Congreso el 17 de febrero el proyecto de “Estatuto de Iniciativa para la Democracia, la Paz y el Desarrollo de América Central de 1984”, consistente en un paquete legislativo para materializar las recomendaciones contenidas en la conocida “Comisión Kissinger” que el gobierno norteamericano ha tomado para sí.

La administración Reagan solicitó 178,7 millones de dólares como ayuda suplementaria para ese país.

Sin embargo, con motivo de la lentitud de la legislatura norteamericana en torno a su aprobación, el Ejecutivo solicitó un anticipo urgente de 92,75 millones de la cifra total y 21 millones de dólares para la contrarrevolución nicaragüense, como anticipo del plan propuesto por la Comisión Kissinger sobre América Central.

La cifra solicitada fue, reducida por el Senado norteamericano a 61,75 millones de dólares, y finalmente se redujo en la Cámara de Representantes a 31 millones de dólares. Con respecto a la ayuda de 21 millones solicitada para la contrarrevolución nicaragüense, después de largos debates la Cámara de Representantes rechazó esta solicitud que el Senado había aprobado previamente. En esa decisión influyeron las denuncias en torno al minado de los puertos nicaragüenses, que habían llegado a su punto culminante cuando se produjeron las discusiones en este cuerpo legislativo.

El incremento de la participación militar indirecta de los Estados Unidos en el conflicto centroamericano, a niveles objetables, no ha encontrado el consenso político a nivel de las cámaras legislativas de ese país.

Estos elementos de la política exterior norteamericana provocaron la oposición congresional más intensa que se haya producido durante todo el período presidencial de Ronald Reagan.

El 24 de marzo, vísperas de las elecciones presidenciales en El Salvador, el presidente Reagan, en su tradicional mensaje radial sabatino, solicitó al Congreso que apruebe con la mayor rapidez su pedido de fondos para un paquete de ayuda militar de emergencia a El Salvador, definiendo nuevamente que el futuro de ese país está muy ligado a la sobrevivencia de la democracia en Centroamérica y a los intereses estratégicos de los Estados Unidos.

Expresó: “este es el momento de la verdad” y agregó “si el Congreso, dando pruebas de responsabilidad, actúa prontamente mientras el costo aún no es excesivo, la democracia en América Central tendrá posibilidades de sobrevivir”.

Finalmente, en cuanto a esta problemática, el presidente Ronald Reagan decidió desafiar la oposición congresional y acudir a sus poderes discrecionales reprogramando, del presupuesto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos la cifra de 62,75 millones para dedicarlos a El Salvador. De forma prioritaria, estas acciones norteamericanas están encaminadas a asegurar la realización de los comicios electorales en ese país, aun cuando no existen las condiciones mínimas para su realización. Con ellas los Estados Unidos pretenden proyectar internacionalmente la imagen democrática necesaria para encontrar a nivel congresional el consenso indispensable para aprobar los requerimientos de ayuda financiera y militar destinados a El Salvador, la forma de legitimar una eventual intervención norteamericana y legitimar su escalada militar para tratar de impedir el triunfo de las fuerzas revolucionarias.

La actitud norteamericana fue apoyar al candidato socialcristiano, José Napoleón Duarte, ante la imposibilidad de unificar a las demás fuerzas políticas del país. Especialmente, las rivalidades entre los candidatos Roberto D'Abuisson, del partido de ultraderecha ARENA, y José Napoleón Duarte, del Partido Demócratacristiano de centro derecha, han sido muy tensas y no han posibilitado su unión en torno al candidato Duarte, con el propósito norteamericano de lograr un gobierno de unidad nacional fuerte y representativo de sus intereses políticos y militares.

Por otra parte, ARENA representa los intereses más reaccionarios del país y sostiene una aberrante posición anticomunista. Sus dirigentes principales están desprestigiados ante la opinión pública mundial y en los propios Estados

Unidos. Para los norteamericanos su elección significaría enfrentarse a extraordinarias dificultades, especialmente las relativas a obtener del Congreso la aprobación de fondos de ayuda militar y económica para este país.

El 25 de marzo se efectuaron las elecciones previstas, luego de un caos organizativo y con serias dificultades. En 85 municipios de 261 no pudieron realizarse por la actividad y control desplegados por el FMLN. Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría requerida, por lo que se hace necesario realizar una segunda vuelta.

HONDURAS

A finales de enero comenzó la fase final de las maniobras militares hondureño-norteamericanas “Pino Alto II”, a las que seguirán los nuevos ejercicios “Pino Alto III” y posteriormente los de Granadero I”. La administración Reagan tiene interés en que en estas maniobras participen efectivos salvadoreños y guatemaltecos.

Al final del trimestre se produjo un movimiento en las Fuerzas Armadas, conocido como el de los coroneles. Al respecto, el gobierno del presidente Suazo Córdova llamó a la población hondureña a mantenerse tranquila y dijo que la situación del país es de absoluta normalidad. El conflicto culminó con la destitución de Gustavo Álvarez. Se situó al frente del ejército al General de Brigada Walter López, jefe de la Fuerza Aérea, y militar de mayor graduación que participó y dirigió ese movimiento.

Honduras continúa apoyando a las bandas contrarrevolucionarias que operan contra Nicaragua. El territorio nacional sirve a los Estados Unidos para desarrollar múltiples maniobras conjuntas que atentan contra la Revolución Nicaragüense y los intentos de Contadora para lograr una solución negociada. El gobierno hondureño ha mantenido una posición aliada a los intereses norteamericanos.

COSTA RICA

En la primera quincena de enero se realizaron conversaciones entre el canciller costarricense, Carlos José Gutiérrez, y el embajador de los Estados Unidos en este país, Curtin Windsor, para analizar el proyecto norteamericano en la esfera militar, que incluye el arribo de un numeroso grupo de ingenieros para un supuesto plan de desarrollo en la zona norte de Costa Rica, frontera con Nicaragua, y desde donde operan bandas contrarrevolucionarias antisandinistas.

El 13 de enero culminaron las conversaciones y se acordó aplazar el proyecto.

El proyecto, denominado de “acción cívica”, fue planteado al presidente Luis Alberto Monge por el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Fred Ikle, y encontró serios obstáculos por parte de sectores del gobierno y de la oposición.

Bill Tagliani, funcionario del Departamento de Estado norteamericano, visitó inesperadamente la región norte de Costa Rica acompañado del embajador norteamericano en ese país, Curtin Windsor. Aunque el funcionario calificó su visita como una gira de observación, en numerosas ocasiones se entrevistó con las autoridades de la zona norteña del país.

En ese mismo recorrido el Embajador responsabilizó al Partido de Liberación Nacional (PLN) de Costa Rica por el futuro del país. Declaró que el partido gobernante tiene que realizar una serie de cambios en materia económica, exigió mejorar la producción e instó a que varias empresas estatales fueran traspasadas al sector privado, exhortó al PLN a actuar con mayor pragmatismo y recomendó aprovechar las ofertas de los Estados Unidos dentro de la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe.

Por su parte el jefe y subjefe de la fracción parlamentaria del PLN, Rodrigo Mora y Miguel Angel Guillén, expresaron que “las declaraciones del Embajador son una intromisión en los asuntos internos del país” La Embajada norteamericana intentó aplacar los ánimos y emitió un escueto comunicado en el que aclaró que los comentarios del representante de la Casa Blanca “se proponían ser una declaración de apoyo para el gobierno”.

GUATEMALA

Las relaciones de los Estados Unidos con Guatemala se han manifestado de forma contradictoria. Aunque durante este trimestre se dieron muestras de un mayor acercamiento, también salieron a relucir públicamente ciertas contradicciones. El 3 de enero el general Mejía Víctores y el enviado especial de los Estados Unidos para Centroamérica, Richard Stone, se reunieron en la ciudad de Guatemala. Ambos funcionarios manifestaron que las relaciones bilaterales se mantenían de forma cordial y amistosa y negaron la existencia de un distanciamiento.

El 13 de enero, al recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Guatemala ante la Casa Blanca, Federico Fashen Ortega, el presidente Reagan expresó que ambos países comparten “objetivos y méritos como el pluralismo, los derechos humanos, la paz, la justicia social y el progreso económico”, y agregó: “debemos trabajar juntos para resolver y proteger estos ideales”. Como es obvio, los Estados Unidos se han empeñado en mejorar la imagen internacional de Guatemala, un país que ha sido condenado

internacionalmente por la violenta represión y el estado de terror que se mantiene contra su población.

La administración norteamericana ha manifestado su intención de que se inicie un proceso progresivo hacia la democracia, y ha realizado presiones de diversa índole sobre el gobierno de Mejía en ese sentido.

El 28 de enero, el embajador norteamericano, Frederick Chapín, anunció que los Estados Unidos autorizaron la venta de repuestos para helicópteros por un monto superior a los dos millones de dólares. Esta noticia se confirmó además por el canciller guatemalteco, Fernando Andrade Díaz Durán, ante medios periodísticos nacionales y extranjeros.

Con esta medida, se anula el embargo de armas decretado en 1977 por los Estados Unidos ante la sistemática violación de los derechos humanos. Esta operación, por otra parte, contradice una recomendación del Informe de la Comisión Bipartidista, encabezada por Kissinger, la cual tuvo que referirse necesariamente al comportamiento brutal de las fuerzas de seguridad guatemaltecas como causa del auge de la resistencia en ese país.

El 14 de febrero el Canciller guatemalteco anunció escuetamente el cese de las actividades diplomáticas del embajador norteamericano en Guatemala, Frederick Chapin. Como se conoce, Chapin mantuvo durante su gestión un público enfrentamiento con Mejía Victo res. En el discurso de despedida ante diplomáticos de otros países y periodistas, el Embajador norteamericano reconoció públicamente la violación de los derechos humanos por parte del régimen, sobre lo cual dijo: “no voy a hablar sobre la violación de derechos humanos, porque es una realidad y no voy a hablar de hambre y miseria, porque también son una realidad”.

El interés norteamericano en reactivar el CONDECA y de convertirlo en una estructura militar con posibilidades de actuar en un momento dado contra Nicaragua y la posibilidad de que Guatemala participara en las maniobras militares conjuntas “Granadero I”, a celebrarse en territorio de Honduras, recibieron un inesperado golpe al conocerse las declaraciones del mandatario guatemalteco, en las que se desmentían los pronunciamientos del coronel Edgar D'Jalma Domínguez, vocero oficial del ejército de ese país, con la afirmación de que el ejército no participaría definitivamente en las maniobras “Granadero II”, así como que tampoco convocaría el CONDECA para examinar la presencia de fuerzas navales soviéticas en el Caribe. La negativa constituye una muestra evidente de las contradicciones en las relaciones entre ambos países.

PANAMÁ

En este período continuó desarrollándose el proceso electoral a celebrarse en mayo. Panamá fue amenazada por el Comité de Asignaciones del Senado norteamericano, una vez que se aprobó una enmienda que suspendería la ayuda militar norteamericana si los militares interferían en el desarrollo o en el resultado de las elecciones presidenciales.

Aprobada por el Senado, esta enmienda fue introducida por el demócrata por Hawai, Daniel Inouye, tras advertir que posiblemente tenga que modificarse en el pleno del Senado en el caso de que contradiga el Tratado sobre el Canal de Panamá. El senador Inouye recordó que en el pasado las fuerzas armadas panameñas habían interferido muchas veces los procesos electorales y derrocado al Presidente legítimamente electo.

La situación económica sigue deteriorándose y el país está inmerso en la campaña electoral. En el marco de las relaciones con los Estados Unidos, Panamá ha sido sometida a fuertes presiones.

MÉXICO

En las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y México existen problemas migratorios, el embargo atunero, proteccionismo comercial, la contaminación ambiental, la deuda externa mexicana y la posición de los Estados Unidos ante la política exterior independiente de México, en especial su actitud frente a los problemas regionales. Dentro del Grupo de Contadora, los mexicanos han mantenido la posición más consecuente y la defensa de una solución negociada al conflicto.

En enero, el embajador norteamericano en ese país, John Gavin, reiteró los contenidos de la Ley Simpson-Mazzoli sobre los trabajadores indocumentados mexicanos que penetran o se encuentran en territorio norteamericano. Esta ley fue criticada por todos los círculos políticos mexicanos y por el propio gobierno, en la figura del presidente De la Madrid, quien pidió públicamente a los Estados Unidos que respeten los derechos de los trabajadores mexicanos que allí laboran.

En las relaciones comerciales entre ambos países resultó ilustrativa la visita realizada por el secretario de Comercio, Malcom Baldrige, que pidió a México la creación de una “atmósfera hospitalaria” para las inversiones extranjeras y el capital privado. Estas declaraciones fueron muy criticadas en medios gubernamentales.

Aun cuando la visita tuvo un carácter privado, Baldrige pronunció un discurso ante la Cámara Americana de Comercio, en el cual acusó a México de “prácticas comerciales desleales”. Condicionó claramente la posibilidad de suscribir un convenio comercial con México a la supresión del supuesto uso

de subsidios a las exportaciones y otras concesiones que deberían hacer los mexicanos. Advirtió que sin un tratado comercial entre ambos países, los Estados Unidos se verían obligados a tratar los problemas casuísticamente, lo que podría ser contencioso y político.

Para muchos analistas de las relaciones bilaterales, la visita de Malcom Baldrige se inscribe dentro de la serie de presiones aplicadas a fin de que México libere su comercio exterior, lo que equivaldría a una entrada al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), entidad a la que todos los gobiernos mexicanos se han negado a pertenecer.

Por otra parte, también se trata de que México flexibilice su ley de inversiones extranjeras, la que prohíbe que el capital foráneo sobrepase el 49% del total invertido en el país, y abrir con ello nuevas posibilidades a la entrada de las transnacionales.

A pesar de las presiones a que ha sido sometido por los Estados Unidos, México mantiene su posición en Contadora a favor de una solución negociada a la crisis regional. El 26 de marzo el presidente De la Madrid comenzó una gira por Argentina, Colombia, Brasil y Venezuela, donde se trataron problemas referidos a la crisis centroamericana, el minado de los puertos nicaragüenses y la crisis económica regional.

En entrevista concedida a The New York Times, De la Madrid aseveró que no existían dudas de que las maniobras militares de los Estados Unidos generaron irritación en América Latina. En alusión a la crisis centroamericana, dijo que “si la violencia militar aumenta, no podremos resolver el problema” y reiteró que su país promueve una solución política y pacífica a través de Contadora.

CARIBE GRANADA

Se presenta cada vez con mayor fuerza una crítica situación económica, un progresivo aumento del desempleo (agravado por el cierre de diversas industrias estatales), el desmantelamiento de las granjas estatales, que en algunos casos han sido devueltas a sus antiguos dueños. La cifra de desempleados rebasa el 30%. Quedaron cesantes muchos granadinos que simpatizaban con la revolución o que ocupaban cargos de gobierno, así como cerca de 600 soldados del Ejército Revolucionario del Pueblo.

El turismo, fuente importante de ingreso en Granada, tuvo prácticamente un comportamiento nulo, lo que contribuyó a la agudización de la crisis. Por otra parte, han sido paralizados todos los programas sociales impulsados y desarrollados por la Revolución Granadina.

Se continuaron violando los derechos humanos. Se intenta borrar todo vestigio revolucionario y se ejerce una sistemática represión y control sobre los militantes del Movimiento de la Nueva Joya.

Aún se mantienen en la isla unos 400 soldados y marines encargados de dirigir el trabajo represivo de los soldados y policías de los países caribeños que se encuentran en Granada.

A fines de enero, días antes de efectuarse la visita a Saint George's del Secretario de Estado norteamericano, en la capital granadina se realizó una reunión de los jefes de Estado que apoyaron la invasión a Granada con el objetivo de tratar sobre la creación de un ejército regional y la ocupación del país.

Shultz viajó a Granada en los primeros días de febrero, y se entrevistó con el presidente del Consejo Ejecutivo Provisional, Nicholas Brathwaite y con el Gobernador General, Paul Scoon. También presidió la apertura oficial de la Embajada norteamericana en ese país, así como la de la oficina de la Agencia Internacional para el Desarrollo. El viaje de Shultz sirvió para consolidar más aún el control estadounidense.

Shultz —que viajó primeramente a Granada y de allí a Barbados, donde se entrevistó con dirigentes de Jamaica, Antigua, Dominica, Santa Lucía, St Kitts Nevis y San Vicente— tuvo como objetivo consolidar un tratado de seguridad regional que se corresponde con la directriz fundamental de la política norteamericana hacia el Caribe. Han sido evidentes los pasos que ha dado la administración norteamericana para la preparación de un llamado ejército de seguridad nacional con hombres procedentes de los cuerpos de policía y ejércitos de los países que participaron en la invasión a Granada. Estos han sido entrenados por la CIA y el Pentágono.

Se informó que el gobierno norteamericano enviaría 30 millones de dólares en “ayuda” a Granada, y que la mitad sería ubicada en lo que llaman seguridad nacional. Asimismo, Reagan anunció que su gobierno ayudaría a terminar el aeropuerto internacional de Point Salines. La culminación de esta obra se estipula en unos 24 millones de dólares.

JAMAICA

La situación económica jamaicana es considerada como la peor de los últimos treinta años, y se caracteriza por una aguda baja de la productividad, la recesión de la industria de la bauxita y por una virtual quiebra de las ramas más importantes de la economía azucarera.

La crisis no ha podido atenuarse, a pesar de los préstamos obtenidos mediante la ayuda directa de los Estados Unidos y los acuerdos con el FMI. El desempleo en este país alcanza niveles del 29% y los precios de los

principales artículos aumentaron entre un 40 y 60%. La deuda externa alcanza el orden de los 4 500 millones de dólares.

El tráfico de marihuana hacia los Estados Unidos ha sido uno de los problemas que se han venido confrontando en las relaciones bilaterales.

Washington advirtió que se prohibirán los vuelos de la aerolínea “Air Jamaica” hacia aeropuertos norteamericanos si se persiste el tráfico ilegal de la yerba. Según funcionarios de la aduana norteamericana, se han detectado cargamentos de marihuana a bordo de aparatos de la aerolínea internacional en su ruta hacia los Estados Unidos. Los servicios aduaneros estadounidenses quieren exigir una multa de 25 dólares por cada onza de marihuana que se encuentre a bordo.

El ministro jamaicano de Utilidades Públicas y Transporte, Pearnel Charles, advirtió en Kingston que la suspensión de la ruta norteamericana de “Air Jamaica” implicaría el cese simultáneo de las operaciones de cuatro empresas aéreas hacia la nación caribeña y traería una pérdida en centenares de dólares para el país caribeño. Jamaica es considerada como el segundo mercado de los narcóticos que se consumen en Norteamérica.

REPÚBLICA DOMINICANA

El trimestre se caracterizó por el continuo deterioro de la situación económica del país en virtud de la aplicación de la segunda etapa de los acuerdos con el FMI, que implican mayor inflación y aumento de los precios en los artículos de consumo. Ello ha originado una ola de protestas populares por las medidas aplicadas por el gobierno por las imposiciones del FMI, entre las cuales sobresalieron las “Marchas contra el Hambre” organizadas por las principales centrales obreras y el Partido de liberación Dominicano (PLD) por separado.

A mediados de febrero, el secretario general del Partido Comunista Dominicano, Narciso Isa Conde, denunció los planes de instalar una base militar norteamericana en Santo Domingo. Según se informó, este fue acordado entre el Pentágono y altos jefes militares dominicanos.

A fines del trimestre en distintos sectores dominicanos causó indignación la respuesta del presidente Reagan a una carta del presidente dominicano, Salvador Jorge Blanco. La misiva fue entregada a la prensa por el secretario de la Presidencia, Hatuey De Camps, y en ella se advierte que el gobierno norteamericano no intercederá para que el FMI sea flexible en sus exigencias. Su publicación desató un debate nacional que ocupó el primer plano en los medios de difusión del país.

BELICE

En el plano de las relaciones bilaterales resultó significativo el anuncio de George Price de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Kissinger, después de su gira por Centroamérica en 1983. El Primer Ministro beliceño expresó a Kissinger el agradecimiento por la promesa norteamericana de ayudar económicamente al país.

Belice enfrenta serios problemas económicos. La crisis de liquidez siguió afectando al gobierno, de tal forma que obliga al Primer Ministro a acudir a la banca para cubrir el fondo de salarios. Por su parte, el FMI continuó presionando para que el gobierno aplique fuertes medidas de austeridad para así conceder un nuevo préstamo.

AMÉRICA DÉL SUR VENEZUELA

lo más significativo en el trimestre resultó la visita que realizara en enero el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales, Langhorn Antony Motley quien sostuvo una entrevista con el presidente venezolano Jaime Lusinchi. Durante el encuentro se analizaron las relaciones bilaterales y la situación centroamericana e internacional. El funcionario se entrevistó además con Luis Herrera Campins, con el cual se trataron asuntos referentes al estado de las relaciones bilaterales, así como la situación centroamericana y las gestiones del Grupo de Contadora en la región.

El papel que Venezuela ha venido desempeñando dentro de Contadora tuvo un bajo perfil durante el trimestre, a pesar de las reiteradas declaraciones a su favor. De acuerdo con las propias versiones oficiales, ello responde a que durante el período el país se ha enfrascado en resolver los problemas relativos al refinanciamiento de su deuda externa a corto plazo que alcanza los 14 310 millones de dólares, lo que implica evitar fricciones con los Estados Unidos.

COLOMBIA

En enero visitó a este país el enviado especial de Reagan para Centroamérica, Richard Stone, quien se entrevistó con el canciller colombiano Rodrigo Lloerdo Caicedo. Agencias noticiosas informaron que el gobierno de Colombia había reconocido la existencia de serias diferencias entre Contadora y los Estados Unidos en cuanto a la búsqueda de una paz negociada en Centroamérica. Las propias agencias informaron que el Canciller había manifestado que los Estados Unidos no han descartado la vía militar como modo de enfrentar el problema, y que Contadora estaba en contra de esta posición. Se señaló que Richard Stone aceptó que el gobierno norteamericano no está completamente de acuerdo con las posiciones del Grupo en razón de que las mismas favorecen “el avance del comunismo”.

En declaraciones a periodistas locales, Stone señaló que las recomendaciones económicas para América Latina, recogidas en el *Informe Kissinger*, podrían demorar más de un año en ser aprobadas.

ECUADOR

En la primera quincena de enero se celebró en Quito la I Conferencia Económica Latinoamericana y del Caribe, convocada por iniciativa del presidente Osvaldo Hurtado y con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Sistema Económico Latinoamericano (SELA). Esta iniciativa tuvo como objetivo central formular una respuesta latinoamericana a la crisis económica y fue acogida con entusiasmo y reconocimiento por todos los gobiernos de la región.

El 12 de enero el Presidente ecuatoriano, al inaugurar la Conferencia, llamó a los gobernantes del subcontinente a colocarse más allá de los intereses nacionales y a realizar un esfuerzo solidario y comunitario para adoptar las decisiones políticas necesarias que permitan superar la grave crisis económica que enfrentan los países latinoamericanos.

Hurtado señaló que la reunión no debía quedarse en una simple declaración de buenas intenciones. Expresó que la presente crisis no es del tipo convencional de carácter cíclico, sino una mutación profunda y trascendente del sistema económico mundial, en cuya redefinición la región de América Latina y el Caribe necesariamente debe estar presente. Al propio tiempo, reconoció que la crisis obedece en parte a las políticas de los gobiernos de la región, pero recordó que las causas provienen en su mayor parte de factores externos que se originan en los países industrializados.

Finalmente, Hurtado expresó que existe disposición para buscar caminos coincidentes con las naciones industrializadas, pero advirtió que “si la crisis económica de nuestros países no se resuelve, podría generarse una nueva causa de graves conflictos sociales y políticos desestabilizadores, que inevitablemente perturbaran el precario equilibrio mundial”.

Como resultado de esta conferencia, se aprobó la “Declaración de Quito”, que desde el punto de vista internacional significó un éxito innegable para el gobierno de Hurtado, no sólo por el amplio respaldo que recibió de los principales gobiernos del continente, sino por el propio contenido de sus pronunciamientos, especialmente el de declarar la imposibilidad de pagar la deuda externa que pesa sobre los países latinoamericanos.

BOLIVIA

El 22 de enero, el general Raúl López Leyton, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de ese país, y el teniente coronel John Tudela, jefe de la

misión militar norteamericana en Bolivia, iniciaron las maniobras conjuntas de paracaidismo denominadas “Cochabamba I”, que se efectuaron en el Departamento homónimo y que se extendieron hasta el 27 de ese mes. Esta actividad fue duramente criticada por la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba y por la Central Obrera Boliviana (COB). A raíz del anuncio en el sentido de que los Estados Unidos suspenderían una donación de trigo a Bolivia si el gobierno no retira las subvenciones a este producto básico, el 31 de enero el ministro boliviano del Trabajo, Horts Grebe, así como varios dirigentes de la COB, acusaron a los norteamericanos de interferir en los asuntos internos de ese país. El Ministro declaró que se trataba de una medida de presión que su gobierno rechaza categóricamente. Preciso además que en este momento no era aconsejable retirar las subvenciones.

Por su parte, Edgardo Vázquez, dirigente nacional de la COB, dijo que la presión norteamericana estaba destinada a lograr que Bolivia siguiera los dictados del FMI. Vázquez reafirmó que los trabajadores bolivianos repudiaban al FMI por su política “insensible y antinacional”. La medida, expresó, es una amenaza de los Estados Unidos y a la vez una clara muestra de que el gobierno norteamericano pretende imponer pautas que se ajusten a su política.

PERÚ

El 16 de febrero el diario gubernamental Expreso dedicó su editorial a las restricciones al Ingreso de lanas de algodón peruanas. El periódico expresó que perjudicaría aún más la ya crítica situación de la industria textil peruana. La Información añade que las medidas proteccionistas traen consecuencias negativas para todos los países, por lo que recomienda al gobierno ejercer ante ellas “una política enérgica y prudente”.

Por su parte, el presidente del Comité Textil de la Sociedad de Industrias, Edwar Holme, calificó las medidas proteccionistas norteamericanas como una actitud electorera del presidente Reagan y calificó las nuevas medidas de inaceptables.

El 23 de febrero, la Embajada de los Estados Unidos en ese país informó que su gobierno designó a David Jordán como nuevo embajador de su país ante el gobierno peruano, y que asumiría sus funciones en el mes de marzo. Jordán es considerado un analista en asuntos políticos y reemplazará al anterior embajador Frank Ortiz, que actualmente desempeña el mismo cargo diplomático en la Argentina.

BRASIL

La visita que realizara en los primeros días del mes de febrero al Brasil el secretario de Estado norteamericano, George Shultz, se enmarca en la continuidad de la política exterior norteamericana en la dirección de estrechar sus relaciones con los países suramericanos, y que en el caso de Brasil tiene sus antecedentes en la visita realizada a ese país por el presidente norteamericano, Ronald Reagan en diciembre de 1982. En esta oportunidad, Shultz se reunió con los representantes brasileños de las distintas áreas de cooperación y para firmar convenios en materia económica, científico-técnica y militar.

Se estableció con Brasil un protocolo de cooperación en la industria militar a través del cual ese país fabricará armamentos con tecnología norteamericana, aunque la exportación a terceros países se vea limitada severamente. Esto coloca a Brasil en una posición ventajosa con respecto a los demás países suramericanos, ya que será el único en recibir un tratamiento similar al que los Estados Unidos le dispensan a sus aliados europeos. Ello significa, además, un impulso para su producción bélica.

Se mantuvieron las contradicciones originadas por la política proteccionista de la administración norteamericana por los impuestos que recomendara el Departamento de Comercio sobre las importaciones de acero brasileño. Entre los aspectos más debatidos durante la visita de Shultz a Brasil estuvo el tema del proteccionismo norteamericano al acero y el azúcar.

A pesar de las fuertes presiones de la administración Reagan en el propósito de acercar a Brasil a los intereses norteamericanos en política exterior, lo cierto es que ello no se logró, sobre todo en lo referido a la posición brasileña con respecto al problema centroamericano. Durante la visita de Shultz, los brasileños manifestaron su inconformidad con cualquier tipo de intervención armada en América Central.

ARGENTINA

A mediados de enero funcionarios diplomáticos acreditados ante el gobierno norteamericano dieron a conocer que el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, enviaría un emisario personal para comunicar a Ronald Reagan la decisión de Argentina de finalizar sus actividades militares en Centroamérica. El 19 de enero *The Washington Post* informó que Argentina suspendería cualquier rezago de su anterior apoyo a actividades contrarrevolucionarias en Centroamérica y que incrementaría su respaldo a Cantadora. El rotativo expresó que la comunicación se había realizado en esa semana y que incluía la retirada total de los asesores militares argentinos en el país. También señaló

que sería suspendido cualquier tipo de entrenamiento o asesoramiento ofrecido por los militares argentinos a las bandas contrarrevolucionarias. La elección de Alfonsín fue comentada por la prensa norteamericana en el sentido de que ella abría una “nueva voz de distensión” a la política centroamericana de los Estados Unidos, sin que ello implique una ofensa directa al Presidente norteamericano.

En los primeros días del mes de marzo agencias informativas internacionales informaron que el gobierno argentino resolvió que la Marina no participaría en las maniobras navales combinadas “Unitas”, que se realizan anualmente con los Estados Unidos.

PARAGUAY

Durante el trimestre se produjeron algunas manifestaciones de descontento por parte de grupos políticos opuestos al régimen de Stroessner. En el editorial del diario opositor ABC Color se hicieron críticas a la dictadura. El diario fue clausurado y su director encarcelado durante siete días. La Embajada norteamericana emitió una nota deplorando la clausura del periódico y el encarcelamiento de su Director.

URUGUAY

El Departamento de Estado norteamericano emitió declaraciones sobre el proceso de democratización uruguayo a raíz de los conflictos sindicales surgidos durante la confrontación militar-sindicatos en ese país.

A fines de enero Alan Romberg comentó los acontecimientos de la segunda quincena de enero, en los que el gobierno proscribió al plenario intersindical de trabajadores que auspició una huelga, que tuvo un fuerte respaldo obrero. En rueda de prensa, Romberg leyó una declaración en la que se expresa que la política norteamericana apoya un proceso político que conduzca al retorno de un gobierno constitucional democrático en el Uruguay. La declaración subrayó que la libertad de reunión y de expresión, incluyendo el desarrollo de organizaciones laborales libres e independientes, constituyen elementos fundamentales de un sistema democrático.

El comunicado agregó que las autoridades uruguayas realizaron importantes progresos para la transición democrática y puntualizó que el programa anunciado por el gobierno contemplaba la realización de elecciones y el retorno a un gobierno civil en 1985.

CHILE

En el período se evidenciaron las discretas presiones ejercidas por los Estados Unidos en el sentido de acelerar las gestiones del gobierno en favor de un

rápido proceso de democratización. Resultaron significativas las consultas bilaterales iniciadas en ese país por funcionarios norteamericanos y chilenos que pusieron a la vista la premura de Washington por conseguir una política más flexible por parte de Pinochet.

En febrero el presidente norteamericano Ronald Reagan señaló en su Informe anual al Congreso un recrudecimiento de la represión y la violación de los derechos humanos en el país austral, por lo que se mantuvo la restricción para la venta de armas a esa nación.

El 14 de marzo, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de representantes de los Estados Unidos impuso una traba adicional a las posibilidades de reanudar la asistencia militar: la extradición del exoficial nazi Walter Reauff, residente en Chile desde hace 25 años, y a quien Pinochet se niega a entregar.

Abril-Junio GENTROAMÉRICA NICARAGUA

El 9 de abril la Cancillería nicaragüense anunció en La Haya su demanda a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por organizar y dirigir la invasión militar de su territorio.

Por su parte, el Departamento de Estado informó a la Organización de Naciones Unidas (ONU), bajo cuya jurisdicción funciona la Corte de Justicia de La Haya, que su país no acatará en los próximos años ninguna decisión de la Corte concerniente a diferencias entre Washington y los países de América Central.

El problema del minado de los puertos nicaragüenses y la decisión norteamericana de sustraerse a la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya provocaron enérgicas críticas en el Congreso. Siete miembros de la Cámara de Representantes presentaron una resolución pidiendo una interrupción inmediata del minado, que es dirigido por la CIA.

El 12 de abril el gobierno norteamericano informó al Congreso que había cesado por el momento el minado de los puertos nicaragüenses, pero no se comprometió a no reanudarlos en el futuro.

A principios de junio se produjo la inesperada visita del secretario de Estado norteamericano, George Shultz. Después de asistir a la toma de posesión del presidente Duarte, Shultz viajó a ese país acompañado de Langhorn Motley, secretario adjunto para Asuntos Interamericanos y por el embajador especial para Centroamérica, Harry Schlaudeman. En entrevista sostenida con el Coordinador de la Junta de Gobierno de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, Nicaragua expresó su esperanza de que la visita de Shultz

constituya un paso serio para iniciar un proceso de búsqueda de solución a los problemas con los Estados Unidos.

Un comunicado oficial emitido por el gobierno nicaragüense expresó que la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) está de acuerdo en sostener ulteriores negociaciones entre representantes de ambos gobiernos, para lo cual se designó al vicescanciller Víctor Hugo Tinaco, quien se reuniría con Harry Schlaudeman. El escrito subrayó que al adaptarse este acuerdo Nicaragua insistió en la necesidad de que en dicha plática se encuentre presente un tercer país de mutua aceptación, lo que deberán definir ambos representantes en su primera discusión.

Ortega manifestó a Shultz su disposición a visitar de inmediato a los Estados Unidos, para sostener un encuentro personal con el presidente Reagan.

Destacó que con secuentemente con la voluntad de paz de la JGRN, Ortega recibió a Shultz en su condición de representante de Reagan, y le hizo varios planteamientos.

Reiteró la permanente disposición de Nicaragua de iniciar conversaciones serias, respetuosas y sistemáticas con la actual administración norteamericana; dijo que los principios y normas del derecho internacional deberían ser el marco de referencia de cualquier proceso de negociación en aras de normalizar las relaciones entre ambos países.

Recordó además que el 15 de octubre de 1983 la JGRN presentó formalmente una propuesta de solución pacífica seria y detallada que los Estados Unidos aún no han respondido, y destacó la disposición a discutir las mutuas preocupaciones sobre seguridad con mira a garantizar una solución estable a los problemas planteados.

También expresaba la disposición a discutir las mutuas preocupaciones sobre seguridad en la perspectiva de garantizar una solución estable a los problemas planteados y recalca que “las manifestaciones verbales de voluntad de negociación deben ser avaladas por acciones prácticas”, como el cese de maniobras militares, de los ataques aeronavales, el minado de puertos, la instalación de bases militares en la zona y la guerra encubierta contra Nicaragua.

Finalmente dejó claramente establecido que los asuntos de carácter interno o cualquier otro que corresponda a la esfera de la soberanía y autodeterminación de Nicaragua, “no son objeto de negociación”.

La visita de Shultz es un elemento nuevo en la política de los Estados Unidos hacia este país. Aunque no exista una real voluntad negociadora, la aceptación del diálogo ha sido consecuencia de la oposición interna y del rechazo de la opinión pública norteamericana a la política hacia Centroamérica.

El 25 de junio, en Manzanillo (México) se inició la primera ronda de conversaciones entre los Estados Unidos y Nicaragua entre el embajador especial norteamericano para Centroamérica, Harry Schlaudeman, y el vicescanciller nicaragüense, Víctor Manuel Tinoco. La reunión se realizó en medio de un total hermetismo, sin que trascendieran los asuntos tratados. Posteriormente se conoció el acuerdo de realizar una nueva reunión de alto nivel entre ambos países para continuar las conversaciones sobre la situación centroamericana.

En los momentos en que se concluía el diálogo, el vocero del Departamento de Estado, John Huges, dijo que el gobierno norteamericano mantendrá la petición de fondos para el programa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra Nicaragua. El anuncio indica a las claras que los Estados Unidos continuarán su apoyo a los antisandinistas, y muestra que no están dispuestos a dialogar francamente con Nicaragua.

EL SALVADOR

Durante el mes de mayo se celebró la segunda vuelta de las elecciones para Presidente de la República, en la que resultó electo Napoleón Duarte con el 53% de los votos, sobre un 46% obtenido por su principal rival, Roberto D'Aubuisson, de ARENA.

Ha sido muy significativa la manifestación de complacencia expresada por el gobierno norteamericano por el triunfo de Duarte, aún antes de haberse emitido el veredicto final.

El 7 de mayo, el presidente norteamericano Ronald Reagan dijo sentirse muy complacido por la segura proclamación de Duarte, y calificó el hecho como uno de los progresos hacia la democracia.

En la segunda quincena de mayo, el recién electo presidente de El Salvador visitó a los Estados Unidos cumpliendo una invitación de su colega norteamericano. Ambos mandatarios coincidieron en el propósito de aumentar la ayuda militar norteamericana a ese país. En un comunicado conjunto resaltaron la necesidad de estrechar los contactos entre ambos gobiernos y aseguraron que la ayuda militar estadounidense hacia El Salvador era esencial para mantener los intereses comunes. Para muchos observadores esto constituyó un abierto respaldo del presidente salvadoreño a la política armamentista de los Estados Unidos hacia Centroamérica. Por otra parte, tuvo gran importancia la propuesta de diálogo ofrecida al presidente Duarte por el precandidato presidencial del Partido Demócrata de los Estados Unidos, reverendo Jesse Jackson, luego de sostener conversaciones privadas con representantes del FMLN-FDR en Ciudad de Panamá. la propuesta contempla cuatro puntos: diálogo-negociación sin condiciones; diálogo en El Salvador;

disposición del FMLN a analizar un cese al fuego dentro del contexto general de medidas prácticas a implementar en una solución pacífica, y finalmente, el apoyo del FMLN a las gestiones del Grupo de Contadora.

HONDURAS

A principios de abril, el presidente Roberto Suazo Córdova garantizó la continuidad de las relaciones de su gobierno con la administración norteamericana, lo que fue comunicado por el Presidente al Embajador norteamericano en Honduras, poco después de conocerse la destitución de Álvarez.

Por su parte, el Departamento de Estado expresó que la destitución de Álvarez y otros militares constituía un problema interno que no debía afectar las relaciones entre ambos países. El portavoz de ese Departamento, John Huges, rechazó las sugerencias relativas al conocimiento por adelantado de esta decisión.

El diario norteamericano *The New York Times* publicó varias entrevistas a altos funcionarios norteamericanos en las que se expresa la complacencia por la designación de López. Según el rotativo, los entrevistados califican a López Reyes como un ferviente anticomunista y como un hombre franco y accesible a la joven oficialidad hondureña.

El General destituido sostenía una fuerte hegemonía alrededor de su persona en la conducción de la institución castrense de ese país y practicaba una política de abuso a sus subordinados. Por otra parte, los propios norteamericanos mantenían recelos con relación a Álvarez, quien tomaba decisiones sin tener en cuenta las posiciones norteamericanas. Esto pudiera precipitar acontecimientos militares regionales en momentos en que los Estados Unidos no tuvieran las condiciones creadas. Es por ello que se da una coincidencia real entre los intereses de los norteamericanos y de los sectores militares que provocaron su destitución.

En declaraciones al diario *The New York Times*, el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas Hondureñas, Walter López, expresó que pediría al gobierno norteamericano un mayor adiestramiento de soldados hondureños que salvadoreños en el Centro de Entrenamiento Militar y de Seguridad (CREM). En el Centro se han estado entrenando un número mayor de tropas salvadoreñas y en diversas oportunidades han surgido divergencias entre las tropas de ambos países.

La nueva cúpula militar en sus declaraciones y con los propios hechos ha demostrado su inalterable posición al lado de los Estados Unidos, especialmente en los aspectos concernientes al apoyo y ayuda a la contrarrevolución antisandinista, la continuación de las maniobras conjuntas

que prácticamente implica la ocupación militar del país, y en general al apoyo a los objetivos básicos de la política norteamericana para el área.

Aunque las relaciones con los Estados Unidos se mantienen al mismo nivel, en los planteamientos referidos al entrenamiento de tropas salvadoreñas han demostrado cierto descontento. En el mes de junio, y a través de su canciller, Paz Barnica, el gobierno de Honduras pidió a los Estados Unidos la revisión del Convenio sobre el entrenamiento de tropas conjuntas hondureño-salvadoreñas en el CREM.

El Canciller expresó que solamente el año pasado unos 1 900 salvadoreños fueron entrenados en esa instalación, en comparación con los 700 efectivos de su país, agregó que los beneficios obtenidos para Honduras son mínimos. En el mismo sentido, el embajador norteamericano Negroonte declaró a algunos periodistas que la revisión del Convenio está siendo discutida ampliamente entre los dos gobiernos, y señaló que hacían esfuerzos por nivelar la proporción de efectivos entre ambos países porque, después de todo, el CREM funciona bajo la jurisdicción hondureña con el financiamiento de los Estados Unidos.

Con respecto a los ejercicios conjuntos, el embajador norteamericano enfatizó su confianza de que continuarán realizándose porque “ofrecían a los hondureños la posibilidad de defenderse a sí mismos” y añadió que “las maniobras han dado señales a nuestros adversarios en el hemisferio para que sepan a lo que estamos dispuestos”. Algunos observadores afirman que la infraestructura militar construida por los Estados Unidos en este país para los ejercicios bélicos permite realizar ,un ataque relámpago contra Nicaragua.

COSTA RICA

A mediados de mayo el embajador costarricense en Washington, Claudio Volio, y el representante alterno ante la Junta Interamericana de Defensa, Luis Guardia, admitieron que se había presentado una solicitud de asistencia militar por 7,6 millones de dólares ante el gobierno de los Estados Unidos.

En declaraciones al diario costarricense La Nación, ambos funcionarios revelaron que dicha solicitud fue enviada por la administración Reagan al Congreso norteamericano, y que estaban sustentados en las recomendaciones de la comisión especial para Centroamérica. Volio explicó que la petición original de su país era por 2,1 millones de dólares para avituallamiento de la Guardia Civil y que en los planes iniciales figuraba la compra de dos helicópteros, de vehículos para uso rural y la modernización del armamento. El diario *La Nación* señaló que también Costa Rica recibiría de Estados Unidos cuatro mil ametralladoras M-16, lanzagranadas, morteros, dos helicópteros y ametralladoras antiaéreas. Recordó los esfuerzos del presidente

Ronald Reagan encaminados a persuadir a Costa Rica para que abandone su proclama de neutralidad y pase a cumplir un papel más agresivo ante Nicaragua. Por su parte el canciller costarricense, Carlos José Gutiérrez, explicó que el trámite para recibir 7,6 millones de dólares lo realizó el Ministro de Seguridad Pública de su país ante la Embajada norteamericana en la capital de este país.

En el trimestre, las medidas propuestas por el Fondo Monetario Internacional no han logrado ser aprobadas por la Asamblea Legislativa en tanto se consideran lesivas a la economía nacional. Las contradicciones en este país en cuanto a las imposiciones del organismo financiero han traído serias contradicciones a nivel de los órganos de poder, lo que ha provocado que el Fondo Monetario Internacional y la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) tengan préstamos congelados por una cuantía hasta de 250 millones de dólares hasta tanto no se llegue a acuerdos.

GUATEMALA

Uno de los aspectos importantes a destacar fue el viaje a los Estados Unidos del presidente Mejía Vítores. Considerado por la prensa guatemalteca como “misterioso”, estuvo rodeado de grandes especulaciones. Supuestamente se produjo para participar en un foro sobre Centroamérica auspiciado por sectores políticos conservadores norteamericanos, pero algunos observadores lo entendieron como un acercamiento entre ambos gobiernos.

El descrédito del régimen continuó en torno al problema de la violación de los derechos humanos, lo que ha dado lugar a que los propios partidos legales y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala hayan expresado su desacuerdo con la política oficial del régimen. Igual actitud en este sentido han asumido instituciones internacionales que atienden este problema. El trimestre pasado el American Watch Committee, entidad independiente norteamericana, señaló que Guatemala se estaba convirtiendo en una nación de presos, donde se multiplican los asesinatos, las torturas, los desaparecidos, y aseguró que el gobierno de Mejía Vítores superaba a sus predecesores en la represión contra el pueblo, las “aldeas modelos” fueron calificadas por esta institución como centros de detención prolongada sin juicio, que invariablemente practican las torturas contra sus víctimas.

Finalmente, se destaca el hecho de que el propio Congreso de los Estados Unidos, a pesar de las presiones ejercidas por el presidente Reagan, se vio precisado a negar un préstamo para proporcionar ayuda militar a ese país solicitada por el gobierno norteamericano. Para los Estados Unidos y para algunos sectores de la oligarquía guatemalteca se hace necesario matizar con tintes democráticos la gestión del gobierno militar.

PANAMÁ

A finales del mes de abril, el enviado especial de los Estados Unidos para Centroamérica, Harry Schlaudeman, visitó la comandancia de las Fuerzas de Defensa de Panamá donde fue recibido por el general Manuel A. Noriega. Schlaudeman estuvo acompañado por el embajador de los Estados Unidos en ese país, Everett Briggs, y sostuvo una entrevista con el general Noriega en la que, según informó el diario Matutino, se discutió y analizó la situación social, política y militar de la región centroamericana. Se trataron además aspectos relacionados con el proceso del Grupo de Cantadora y la posición panameña ante los conflictos regionales.

El día 6 de mayo se efectuaron las elecciones en Panamá, en las cuales resultó electo como nuevo presidente de ese país Nicolás Ardito Barletta, quien tiene fuertes vinculaciones con la banca internacional y goza de las simpatías de la administración norteamericana. A mediados de mayo Barletta se pronunció por la retirada de todas las fuerzas militares externas de Centroamérica y planteó la necesidad de evitar a toda costa la confrontación armada en la región.

Las relaciones con los Estados se han caracterizado por evitar roces y enfrentamientos de este país con los norteamericanos. Tratan por ello de mantener posiciones moderadas y de encontrar paliativos a la situación económica que confrontan, esperando recibir la ayuda del gobierno norteamericano a través de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe.

MÉXICO

En los primeros días de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio a conocer un comunicado donde rechazaba las acciones militaristas y las presiones de todo tipo como "apoyo a los designios estratégicos", en evidente alusión a los Estados Unidos. Este comunicado expresó la posición mexicana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) por la escalada militar y el bloqueo que se ejerce sobre Nicaragua.

México también se pronunció contra "la absurda pretensión de alcanzar la paz haciendo la guerra", y en favor de la solución negociada y racional de los conflictos existentes. básicamente en Centroamérica.

La decisión de la administración Reagan de elevar las tasas de interés aumenta la ya voluminosa cifra de 12 000 millones de dólares que México deberá pagar por el pago de intereses de su deuda externa. Esta decisión se produce cuando este país ha estimado el inicio de una recuperación económica con un crecimiento del 1 % sobre la base de que no aumentarían las tasas de interés.

El 17 de abril en Washington se dio inicio a la cuarta reunión de la comisión binacional México-Estados Unidos. Encabezó la delegación mexicana el

ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Bernardo Sepúlveda. El secretario de Estado norteamericano, George Schultz, presidió la delegación de su país.

Estas negociaciones bilaterales se han realizado después de que el Congreso mexicano condenó a los Estados Unidos por el minado de los puertos nicaragüenses. La Comisión Permanente del Congreso censuró la posición belicista norteamericana y la negativa de los Estados Unidos de someterse a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Por otra parte, también ha precedido a estas conversaciones, la gira que el presidente De la Madrid realizara por varios países latinoamericanos (Venezuela, Brasil, Colombia y Argentina) con el doble propósito de buscar, por una parte, apoyo para la política exterior de su país y las gestiones del Grupo de Contadora en la búsqueda de una salida negociada en oposición a la escalada militar norteamericana en el conflicto, en el caso centroamericano. Y por otra parte, para recabar de los países visitados un préstamo de 500 millones de dólares para la Argentina.

Según fuentes diplomáticas, durante las conversaciones sostenidas en el marco de la cuarta reunión de la comisión binacional México-Estados Unidos, México reiteró su oposición al minado de los puertos nicaragüenses, mientras que los Estados Unidos sostuvieron que su injerencia en Centroamérica se basaba en la defensa de sus intereses vitales. Con ello se ratificaron las diferencias de enfoques entre ambos países en cuanto a política exterior y en especial sobre América Central.

La política exterior mexicana, sin lugar a dudas, ha traído al gobierno de ese país serias discrepancias con los Estados Unidos. Esto quedó demostrado durante la visita que realizara a Washington, a mediados del mes de mayo, el presidente mexicano De la Madrid. Durante la entrevista el presidente norteamericano Ronald Reagan reiteró sus argumentos de que los conflictos centroamericanos surgen de una “amenaza comunista” en la zona, aunque para la administración norteamericana es ampliamente conocida la posición mexicana que sitúa el origen de esos problemas en las profundas desigualdades socioeconómicas que prevalecen en la región.

De la Madrid planteó categóricamente que México no está dispuesto a cambiar sus principios de política exterior por transacciones económicas. Esto fue calificado por algunos analistas como una respuesta a la versión difundida en el mes de abril en los Estados Unidos de que Reagan condicionó la ayuda económica y financiera a un alineamiento exterior de México con Washington.

La reunión se caracterizó por una evidente discrepancia unida a un clima hostil, lo que impidió que se suscribiera un comunicado conjunto final.

Para cerrar el trimestre, en el marco de los problemas que afectan las relaciones bilaterales, el Senado norteamericano aprobó el proyecto de Ley Simpson-Mazzoli, lo que implicará el recrudecimiento de la represión contra los indocumentados que buscan fuentes de trabajo en territorio norteamericano.

CARIBE GRANADA

A fines del mes de mayo, el jefe del gobierno interino de Granada, Nicolas Brathwaite, asistió a la ceremonia de graduación del Centro de Entrenamiento de la Policía Caribeña en Bridgetown. Esta visita parece corroborar la sujeción de Granada a la militarización creciente de Barbados. Esta última ha sido designada por Washington para hacerse cargo del patrullaje de las costas de Granada, que actualmente realizan los norteamericanos con el supuesto fin de “evitar infiltraciones” en esta isla caribeña. Ello concuerda plenamente con la creación de una guardia costera regional, como parte del acuerdo norteamericano de brindar asistencia y equipo militar a los países del Caribe oriental.

JAMAICA

La situación socioeconómica jamaicana sigue agudizándose. En los últimos seis meses la moneda ha sido devaluada en un 125%; el nivel de vida decreció en un 25%; aumentaron en miles los trabajadores despedidos y los productos esenciales se elevaron entre un 30 y un 50%. Las multinacionales *Reynolds*, *Pan American*, *Esso*, *Hilton* y la *Sheraton* cerraron sus puertas. El controvertido programa de inversiones extranjeras al país se cumple sólo en un 20%.

REPÚBLICA DOMINICANA

A fines del mes de abril se desataron en ese país violentas protestas populares contra la política económica gubernamental. 86 muertes, centenares de heridos y más de 2 000 detenidos fue el saldo de los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública dominicana. Las movilizaciones fueron realizadas en protesta al aumento de los precios y de los artículos de primera necesidad decretados por el gobierno y al acuerdo suscrito por el país con el FMI.

A principios del mes de mayo el gobierno dominicano militarizó las principales ciudades, para contrarrestar la huelga de 24 horas decretada por las cinco centrales dominicanas en protesta por la situación económica que afronta el país. Las centrales sindicales señalaron que el gobierno era el único

responsable de las luchas populares por las medidas económicas fondomonetaristas que viene implementando.

Se desplegó una oleada represiva gubernamental contra activistas de izquierda, dirigentes sindicales y campesinos. Después de ser puestos en libertad, la Policía Nacional señaló que podrían ser perseguidos o apresados nuevamente si se detectaban “nuevos indicios de planes de alteración del orden público”.

A fines de junio el presidente Jorge Blanco fue acusado de dirigir personalmente las investigaciones que realizaron los organismos de seguridad en torno a presuntos planes conspirativos de la izquierda. También fue acusado Hatuey de Camps, secretario de la presidencia, de quien se dijo planificó la acción represiva en su propia oficina, conjuntamente con un alto funcionario de la embajada norteamericana en ese país.

Entre los detenidos se encontraba el secretario general del Partido Comunista Dominicano, Narciso Isa Conde, y otros dirigentes del Frente de Izquierda Democrático (FIDJ).

BELICE

El 12 de junio en Belmopan, la capital beliceña, se suscribió un convenio con los Estados Unidos mediante el cual Belice recibirá un millón de dólares en equipos militares.

El acuerdo fue firmado por el secretario permanente del Ministerio de Defensa norteamericano, mayor David O' Conner, y el comandante de las Fuerzas de Defensa beliceño, teniente coronel Julio Starmer Smith. Al propio tiempo, funcionarios del Ministerio de Defensa de ese país, desmintieron versiones de la prensa nacional sobre un supuesto proyecto norteamericano para establecer una base militar.

Un oficial expresó que ya Belice tiene un Tratado de Defensa con Gran Bretaña, que garantiza la permanencia de tropas inglesas en ese territorio hasta tanto no se solucione el conflicto fronterizo con Guatemala. que reclama la anexión de ese país.

Continúan la crisis financiera y las presiones del Fondo Monetario Internacional. En esta dirección se encaminan las gestiones del premier Price, quien logró aplazar la conclusión del acuerdo con este organismo financiero internacional, con vista a mejorar su imagen y la de su partido ante el clima electoral existente en el país.

AMÉRICA DEL SUR VENEZUELA

El 9 de abril viajaron a Washington y a Nueva York, el ministro de Hacienda venezolano. Manuel Azpurua, el presidente del Banco Central de Venezuela,

Benito Raúl Lozada y el negociador venezolano de la deuda externa. Carlos Guillermo Rangel. Este viaje se realizó después que se produjo un alza en un 1 % de los intereses bancarios en los Estados Unidos. Para Venezuela, esto implica que su deuda con más de 400 bancos extranjeros aumente en 270 millones de dólares. El objetivo de la delegación venezolana era convencer al gobierno norteamericano y a la propia banca acreedora que tuvieran una posición más realista en cuanto a la deuda venezolana. Esta delegación se entrevistó en Washington con Paul Volcker, presidente del Banco de la Reserva Federal del Estado.

Posteriormente conversaron con el secretario y subsecretario del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, Ronald Regan y Robert S. Mc Namara respectivamente, con quienes se analizaron el paquete de medidas económicas decretadas por el presidente Jaime Lusinchi, las cuales tienen como objetivo básico el refinanciar la deuda. Sostuvo también una entrevista con un comité del FMI donde Estados Unidos ejercen gran influencia.

El 15 de abril el canciller venezolano, Isidoro Morales Paúl, viajó a Washington donde sostuvo una entrevista con el secretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos Latinoamericanos, Langhorne Motley. Según fuentes noticiosas se trataron asuntos relativos a las relaciones bilaterales, así como asuntos relativos a la situación centroamericana y en particular el minado norteamericano de los puertos nicaragüenses. Se tocó también la actual situación en la isla de Granada, país caribeño que fuera invadido en octubre del año pasado por tropas de los Estados Unidos.

Durante la segunda quincena del propio mes de abril arribó a Venezuela el embajador itinerante de los Estados Unidos para América Central. Harry Schauldeman, quien se entrevistó con el presidente venezolano Jaime Lusinchi. El encuentro entre ambas personalidades giró en cuanto a la crítica situación centroamericana.

Venezuela sigue manteniendo sus posiciones en el Grupo de Contadora en la búsqueda de una solución pacífica a la situación de la región centroamericana, aunque su participación sigue manteniendo un bajo perfil. Además durante este trimestre Venezuela permitió el ingreso del contrarrevolucionario Edén Pastora.

Los nexos con los Estados Unidos se mantuvieron en el plano amistoso, a pesar de las discrepancias surgidas en cuanto a la renegociación de la deuda externa venezolana por las presiones ejercidas por el Fondo Monetario Internacional y por el alza de las tasas de interés.

COLOMBIA

Durante el trimestre se produjo el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por elementos vinculados directamente al narcotráfico. La indignación creada por este hecho conllevó a que el presidente Betancur declarara el estado de sitio en todo el país, vinculara al ejército colombiano en la represión contra el narcotráfico y al propio tiempo modificara su actitud ante los Estados Unidos referente a su mantenida posición de no extraditar delincuentes colombianos hacia los Estados Unidos. El día 2 de mayo el Presidente colombiano anunció categóricamente que los colombianos vinculados a la actividad del narcotráfico y señalados por las autoridades pertinentes norteamericanas serían entregados a los tribunales de esa nación. Las solicitudes que en este sentido habían hecho durante el trimestre anterior los Estados Unidos habían sido denegadas por el propio Betancur. Este había sido un punto contradictorio basado en los propios argumentos expresados por él de “respeto a la dignidad del ser humano, el cual tiene derecho a ser juzgado por los jueces de su país, por razones filosóficas, por convicciones acerca de la soberanía de los pueblos, por colocar una barrera contra el maniqueísmo”. Sin embargo, durante los funerales del ministro Lara Bonilla, el Presidente colombiano subrayó que “estamos en la hora de la reflexión sobre la patria, la nación y los ciudadanos, tales conceptos han sido pisoteados por quienes han creado un imperio sin fronteras, con una bandera negra como enseña y la indignación y la muerte como únicos propósitos”.

ECUADOR

Durante el mes de mayo se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ese país, resultando electo el candidato socialcristiano León Febres Cordero, quien tomara posesión de su cargo el primero de agosto del presente año.

El Presidente electo de ese país, Febres Cordero, anunció que el principal problema que enfrentará su gobierno es la aguda crisis económica y financiera por la que atraviesa el país y su tendencia a incrementarse. Ecuador busca afanosamente el refinanciamiento de unos 600 millones de dólares de la deuda externa que vence este año, y pide a sus bancos acreedores un nuevo crédito de 400 millones de dólares.

BOLIVIA

En los primeros días de junio el gobierno de Bolivia decidió suspender temporalmente el pago de su abultada deuda externa heredada de los regímenes militares.

La medida fue adoptada luego de una reunión sostenida con la Central Obrera Boliviana (COB), en la cual se analizó la difícil situación económica que afronta el país y se tomaron medidas encaminadas a resolver divergencias surgidas entre el gobierno y los trabajadores.

Uno de los puntos más importantes del acuerdo (COB) gobierno plantea “la postergación temporal de todos los servicios” de la deuda externa y su negociación en forma conjunta y coordinada con otros países latinoamericanos.

La postergación de la deuda externa, que días antes había sido notificada al *Bank of America*, provocó desconcierto en círculos financieros internacionales, pero a la vez, expresiones de solidaridad de diversos organismos latinoamericanos.

En declaraciones a agencias internacionales, el vicepresidente Jaime Paz Zamora subrayó la importancia de que los bolivianos hayan tomado conciencia de que son un país deudor, y de que manifiestan la disposición de pagar esa deuda pero en condiciones realistas.

A principios de junio, el embajador norteamericano Edwin Corr viajó sorpresivamente a Washington, y según algunas fuentes noticiosas, aparentemente disgustado por la decisión boliviana sobre su deuda externa. Las mismas fuentes comentaron que sin embargo se había despedido de los ministros de Defensa y del Interior bolivianos. El diplomático norteamericano ha sido acusado reiteradas veces de interferir en los asuntos internos del país.

PERÚ

Durante el mes de mayo los Estados Unidos cancelaron abruptamente, cuando ambos gobiernos negociaban, un nuevo convenio aeronáutico, los permisos de operaciones de las líneas peruanas en ese país, tras lo cual los peruanos hicieron lo propio.

En el mes de junio los tripulantes, técnicos y empleados de la línea estatal “Aereoperú”, en un comunicado público, expresaron que los norteamericanos quieren obligar a Perú a someterse a un arreglo que favorezca a los Estados Unidos en el conflicto aeronáutico bilateral, y para ello el Departamento de Estado presiona a varios países latinoamericanos. Este comunicado público pide además, la solidaridad de los pueblos y gobiernos de América latina ante la pretensión norteamericana de imponer relaciones aerocomerciales onerosas para el Perú.

Se anunció que los gobiernos peruano y norteamericano iniciarían el 25 de junio en Washington negociaciones encaminadas a superar el conflicto que mantiene cerrado el tráfico aerocomercial entre las compañías de ambos países. El ministro peruano de Transporte y Comunicaciones, Carlos Pestana,

expresó que en estas negociaciones Perú aspira a modificar los términos de sus relaciones aeronáuticas con los Estados Unidos, y que estas deben basarse en criterios de reciprocidad y justicia, teniendo la precaución de preservar los derechos e intereses de ambas partes.

En este trimestre ha sido significativa la posición peruana —en contra de la tesis de algunos países latinoamericanos sobre una negociación multilateral de la deuda externa, sin los Estados Unidos—, cuando planteó ventilar la misma en los marcos de la OEA. Esta actitud fue evaluada por un historiador peruano como “un acto de traición del Perú a otros países latinoamericanos”

A pesar de las posiciones peruanas, los Estados Unidos han seguido manteniendo su línea de presiones sobre este país, y una muestra de ello han sido las amenazas norteamericanas de imponer restricciones a las exportaciones peruanas. El anuncio norteamericano fue recibido en medio de un rechazo generalizado en ese país, a mediados del mes de junio.

Al respecto, el presidente Belaunde Terry afirmó que su país tomará medidas recíprocas contra los norteamericanos si se le cierra ese mercado, y añadió que su gobierno realiza gestiones para que no se concrete el proyectado recorte de importaciones cupríferas peruanas por parte de los Estados Unidos.

En cuanto a la situación económica, se destaca que el gobierno peruano logró el refinanciamiento del 90% de su deuda externa, lo que le permitirá de inmediato implementar algunas medidas para contrarrestar los niveles de confrontación con las organizaciones políticas de oposición.

La deuda externa peruana, a corto plazo, hasta 1983 ascendía a 1 175 millones de dólares.

BRASIL

Durante este trimestre fueron significativas las discrepancias brasileño-norteamericanas en cuanto a las medidas proteccionistas que quieren aplicar los Estados Unidos al acero brasileño.

En el mes de abril, el gobierno de ese país recibió con profunda irritación la decisión norteamericana de aplicar una sobretasa impositiva del 62% a las exportaciones de acero de la Compañía Siderúrgica Nacional del Brasil.

El 2 de mayo se inició en Washington una rueda de consultas políticas una misión brasileña encabezada por el embajador Ronald Sardenberg, sobre el peligro de generalización de una guerra en Centroamérica.

Fuentes diplomáticas brasileñas manifestaron que el gobierno del presidente Joao B. Figueiredo desea conocer con precisión cuáles eran las intenciones de los Estados Unidos con respecto a las propuestas de paz del Grupo de Cantadora y cuál sería la misión final de las tropas que durante este período se han estado enviando a la región.

Ha sido evidente el distanciamiento entre las posiciones de Brasil y los Estados Unidos sobre la crisis en América Central debido esencialmente a la oposición de Brasil al incremento de la presencia norteamericana en la región.

ARGENTINA

A principios de abril, con motivo de haberse llegado a un acuerdo financiero con la participación de los gobiernos de México, Colombia y Venezuela, además de los Estados Unidos y los bancos acreedores de Argentina para posibilitar la suma de 500 millones de dólares para pagar los intereses vencidos de la deuda externa argentina, el presidente norteamericano Ronald Reagan aprovechó la ocasión para estrechar las relaciones con el presidente Raúl Alfonsín, quien, al agradecer la ayuda, señaló que estaba convencido de que tenían que “iniciar un nuevo diálogo, no latinoamericano frente a los Estados Unidos, sino latinoamericano con los Estados Unidos”.

El embajador norteamericano en la Argentina, Frank Ortiz, señalado por muchos sectores latinoamericanos como figura destacada de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, desató durante el mes de mayo una intensa actividad diplomática que incluyó un plan de visitas a las provincias más importantes del país.

En la provincia de Mendoza, Ortiz presidió un encuentro con el gobernador de esa región y representantes de distintas empresas norteamericanas radicadas allí. En el marco de la actividad, el embajador Ortiz afirmó que las corporaciones norteamericanas “están estudiando si existen condiciones propicias para inversionistas en la Argentina”. Agregó que “las empresas quieren invertir en el país, pero necesitan contar con buenas posibilidades de ganancia.”

En Argentina, las actividades desplegadas por el embajador Ortiz y sus continuas opiniones acerca de problemas internos de ese país han sido reiteradamente criticadas.

En la primera quincena del mes de junio los Estados Unidos retiraron la garantía de un préstamo por 300 millones de dólares que fue avalado meses atrás ante Argentina y otras cuatro naciones latinoamericanas.

En marzo pasado, el gobierno de los Estados Unidos garantizó el préstamo puente por 300 millones de dólares otorgados por México, Colombia, Venezuela y Brasil ante la imposibilidad argentina para cancelar su deuda externa.

En esa oportunidad Washington prometió entregar esa cantidad al gobierno argentino para que pagara a los cuatro gobiernos latinoamericanos. La entrega fue condicionada a la firma de un acuerdo entre Argentina y el FMI.

La decisión norteamericana, en momentos en que aún el país sureño no había concluido las negociaciones con el FMI, fue una evidente muestra de la presión sobre la administración argentina para que esta acate las condiciones onerosas del organismo financiero que controla los Estados Unidos.

Argentina confronta una grave situación económica, ya que su deuda externa supera los 43 000 millones de dólares, con una inflación anual del 43%, agudizada por una recesión interna caracterizada por la existencia de dos millones de desempleados y subempleados y con un alto grado de desocupación fabril.

En política exterior mantuvo cierto equilibrio. En el contexto de los problemas regionales continuó apoyando al Grupo de Contadora y suscribió conjuntamente con los gobiernos de Brasil, México y Colombia una declaración de denuncia a la política fiscal norteamericana y de promoción a la Cumbre Ministerial Latinoamericana para analizar los problemas de la deuda externa del continente y ante el alza de las tasas de interés provocada por la política de los países desarrollados, especialmente los Estados Unidos.

PARAGUAY

A fines del mes de mayo el Departamento de Estado norteamericano alabó las medidas adoptadas recientemente por el gobierno de este país en el campo de los Derechos Humanos.

A través de Anita Stockman, portavoz del Departamento de Estado, se dio a conocer que era encomiable la liberación de un preso cuya condena a 15 años de cárcel había concluido en 1977, así como el fin de un juicio contra veinte personas bajo el cargo de pertenecer al ilegalizado Partido Comunista Paraguayo. Sin embargo, Stockman agregó que el gobierno de los Estados Unidos seguía aún preocupado por la clausura del diario ABC Color, el pasado mes de marzo por un editorial publicado donde se emitían críticas al régimen.

En los primeros días del mes de junio en la ciudad de México, el miembro del Comité Central del Partido Comunista Paraguayo, Hugo Campos Paredes, ofreció una conferencia de prensa donde denunció que ante el avance del movimiento democrático en el Paraguay y en América Latina, los Estados Unidos planean convertir al Paraguay, con la complicidad del gobierno fascista de Stroessner, en la Honduras del continente suramericano. El dirigente señaló que la instalación de una base militar norteamericana en la región de El Chaco serviría de base de operaciones contra los movimientos de liberación en la región. Denunció, asimismo, que la instalación de la base militar fue acordada en ocasión de la visita a la capital del Paraguay del

general Robert Schwitzer, representante del Pentágono, en noviembre de 1983.

La base estaría ubicada en Pozo Colorado, lugar cercano a las fronteras de ese país con Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Perú. Paredes subrayó que desde este punto estratégico los Estados Unidos intentarían presionar sobre los países vecinos, organizar complots, actos de sabotaje e incluso la intervención de sus fuerzas armadas, bajo el conocido argumento de la “defensa de la democracia”.

URUGUAY

En los primeros días de agosto el rotativo norteamericano The New York Times publicó un artículo según el cual el gobierno del presidente norteamericano, Ronald Reagan, omitió defender la democracia en el Uruguay al ignorar la detención en Montevideo en el mes de junio del candidato presidencial del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate. En el mismo se señala además que el Departamento de Estado norteamericano no está del lado de la democracia uruguaya, sino a favor de elecciones en las que ganen sus favoritos; para lograr esto, puntualizó, está dispuesto a dejar que los más populares políticos uruguayos, demócratas probados, languidezcan en las cárceles de ese país. El artículo, escrito por Kai Berd y Max Holland, dice además que al tornarse evidente el año pasado que las elecciones en el Uruguay eran inevitables, el Departamento de Estado se movió hábilmente detrás de todo el proceso.

La publicación de este artículo motivó que en el propio mes de agosto el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Alan Romberg, lo calificara de tendencioso, y sostuvo que ese tipo de despacho periodístico no estaba facilitando la evolución democrática uruguaya. Manifestó además que “nosotros no favorecemos la candidatura de Sanguinetti o de ningún otro aspirante. Nosotros favorecemos el proceso de democratización y la negociación entre uruguayos”. Afirmó que los Estados Unidos tienen un profundo interés en las elecciones de ese país suramericano y que el objetivo principal norteamericano es contribuir a la exitosa transición a la democracia. Refiriéndose al proceso actual del Uruguay, lo calificó como etapa de transición caracterizada por las activas negociaciones entre el gobierno y los líderes de la oposición. Apuntó que todos los partidos están apoyando estas negociaciones, aun cuando el Partido Blanco no tenga una participación activa en protesta por la detención de Ferreira. Puntualizó además que el gobierno uruguayo ha hecho diversas concesiones, incluida la legalización de todos los partidos políticos con excepción del Partido Comunista Uruguayo, y que se ha permitido el retorno de unos 6 500 políticos previamente expatriados para que

participen en el proceso nacional. Finalmente, Romberg dijo que “la naturaleza de la transición, inclusive el rol de Ferreira, es algo que deben definir los uruguayos”.

CHILE

Durante el trimestre continuaron las reiteraciones eventuales del gobierno norteamericano, sus llamados y presiones relativas al interés norteamericano de que Pinochet implementara un proceso de apertura democrática en ese país. cuya situación continúa caracterizándose por una sostenida crisis económica y social.

El régimen chileno ha continuado aplicando medidas represivas para neutralizar la situación. Estas medidas, entre las que se incluyen la promulgación de una llamada “Ley Antiterrorista”, la modificación de la legislación sobre la prensa y el decreto que transformó a la DINA en CNI, son los mecanismos utilizados para darle un matiz legal a la represión, la tortura y el asesinato, así como una forma de limitar aún más la ya restringida libertad de expresión.

Debemos recordar que a pesar de las presiones norteamericanas para que Pinochet dialogue con las fuerzas legales de oposición y de algunos pasos hacia un tránsito democrático en ese país, Pinochet ha manifestado reiteradas veces que no está dispuesto a abandonar el poder antes de 1989.

Julio-Septiembre

CENTROAMÉRICA NICARAGUA

Durante este trimestre, la situación de Nicaragua tendió a complicarse debido a las amenazas de agresión de los Estados Unidos, el incremento de la actividad contrarrevolucionaria en su territorio, la agudización de la situación económica, el proceso electoral con vista a las elecciones del 4 de noviembre y los procesos negociadores de Contadora y Manzanilla. El 20 de julio, el comandante Daniel Ortega advirtió sobre el peligro de una intervención militar directa norteamericana como parte de una carta electoral a jugar por el presidente Ronald Reagan. Vinculó ese plan a la presencia de buques de guerra norteamericanos en las cercanías de las costas nicaragüenses, en particular el portaviones “John F. Kennedy”, con 70 aviones a bordo y 5 000 hombres, ubicado a una distancia entre los 81 y 100 km al este-sudeste de Bluefields y a 21 km de Cabo Blanco en Costa Rica. Ortega expresó que los Estados Unidos reagrupan fuerzas mercenarias en Honduras y desplazan buques de guerra hacia aguas nicaragüenses.

El 18 de agosto, en una entrevista concedida al diario norteamericano The Washington Post, el comandante Daniel Ortega denunció un plan de la

Agencia Central de Inteligencia (CIA) para asesinar a uno o más miembros de la dirección nacional del Frente Sandinista. Esa acción, advirtió, se atribuiría a una presunta división de crear un clima de aparente desorden y confusión interna, como el que precedió a la invasión estadounidense en Granada. Parte de este plan son los anuncios aparecidos en algunos periódicos de países latinoamericanos alentando una supuesta disputa por el poder en el Frente Sandinista.

Alertó al propio tiempo que mientras los Estados Unidos mantienen conversaciones con Nicaragua, en el marco del Diálogo de Manzanilla, ese país incrementa su agresión con el envío de más barcos de guerra a las costas nicas. Mencionó, además, que las reiteradas acusaciones de que en Nicaragua hay bases soviéticas y las falsas acusaciones de que funcionarios del gobierno nicaragüense están vinculados con el narcotráfico, son parte de esos planes y están dirigidos a justificar una intervención directa norteamericana.

El 5 de septiembre Nicaragua solicitó una reunión urgente e inmediata al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para examinar la situación creada por la nueva escalada agresiva desatada contra esa nación. Adjunta a la petición, la misión nicaragüense envió copia de una misiva enviada al secretario de Estado norteamericano, George Shultz, donde responsabilizó a los Estados Unidos de las reiteradas agresiones de que es objeto Nicaragua desde territorio hondureño.

El 7 de septiembre, en Panamá, se celebró la reunión de cancilleres centroamericanos y del Grupo de Contadora, destinada a que todos los países centroamericanos expusieran sus últimos aportes al Anteproyecto de Acta de Paz elaborado por Contadora; ese propio día Nicaragua anunció su disposición de firmarla.

El 21 de septiembre, ante todo el Gabinete y el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, el comandante Daniel Ortega Saavedra y el canciller D'Escoto anunciaron al pueblo nicaragüense y al mundo la decisión de Nicaragua de “aceptar en su totalidad y suscribir de inmediato, sin modificación alguna”, el Acta Revisada de Contadora del 7 de septiembre.

Nicaragua fue el primer país centroamericano que se pronunció sobre el texto final del Acta y lo aceptó plenamente. La reacción fue muy favorable entre los mandatarios de Contadora, en América latina y en Europa. Sin embargo, el gobierno norteamericano se vio sorprendido por esta decisión, obligándolo a distanciarse del documento, que le prohibía mantener sus bases militares, realizar maniobras y otras limitaciones a sus acciones en la región.

El 28 de septiembre, en una entrevista concedida al diario nicaragüense Barricada, el canciller Miguel D'Escoto describió la actitud norteamericana encaminada a distorsionar la posición nicaragüense, tanto en su política

exterior como en su política interna con respecto a las elecciones. En esa oportunidad el Canciller dijo: “Sucedo que con la propuesta de Contadora pasa algo muy similar a lo que pasa con respecto a las elecciones en Nicaragua. La administración Reagan ha tratado de justificar su ilegal y criminal agresión contra nuestro pueblo porque en Nicaragua no se habían celebrado elecciones. Ahora que nos encontramos en pleno proceso electoral y a punto de celebrar las elecciones, hacen todo lo posible, a través de sus títeres, para lograr la postergación de la fecha de nuestras elecciones. Asimismo, en los últimos meses han venido diciendo que la única manera de resolver la crisis centroamericana sería que Nicaragua coopere con Contadora, y han manifestado que ese es precisamente el objetivo que persiguen en las conversaciones bilaterales que se realizan en Manzanillo. Pero ahora que ha llegado la hora de la verdad y que Contadora presenta su propuesta formal y oficial después de un amplio proceso de consultas y Nicaragua la acepta sin reservas, los Estados Unidos insisten en que la propuesta de Contadora es deficiente y que a Nicaragua habría que castigarla por estar apoyando a Contadora. ¿Cómo entender los caprichos imperiales, sino admitiendo que ni negociaciones honorables basadas en las normas del derecho internacional ni democracia es lo que interesa o ha interesado jamás a Reagan, y que lo único que les interesa es negar al heroico pueblo de Nicaragua el derecho a decidir su propio destino como corresponde a todo país independiente y soberano?”

EL SALVADOR

Durante el trimestre se resalta la campaña propagandística desarrollada por el gobierno de Duarte, destinada a señalar la disminución de la violación de los derechos humanos en ese país y al restablecimiento de las libertades democráticas.

Por su parte, los Estados Unidos han extendido sus elogios a Duarte para evitar que en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se apruebe una resolución condenatoria por la violación de los derechos humanos en El Salvador en el marco de la Asamblea General de ese organismo internacional.

No obstante, en el logro de este empeño los Estados Unidos reconocen que se siguen produciendo acciones de este tipo, aunque alegaron que se había reducido en un 33% los asesinatos y crímenes que se producen en el país. A principios del mes de agosto el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, Paul Gorman, expresó desde Washington su admiración por la actuación del ejército salvadoreño y dijo que este ha experimentado una transformación institucional muy importante. Gorman afirmó ante la Cámara de Representantes que si el Congreso brindaba a El

Salvador la asistencia militar recomendada por la Comisión Kissinger, el ejército de ese país podría controlar, en un plazo aproximado de dos años, de un 80 a un 90% del territorio y dejar a las guerrillas confinadas a áreas no pobladas.

Finalmente, el Jefe del Comando Sur descartó ante el Congreso la eventualidad de una intervención militar de su país en El Salvador. El impacto producido por el triunfo de Duarte facilitó la aprobación congresional de 70 de los 117 millones de dólares de ayuda militar suplementaria solicitada por la administración Reagan para ese país para el año fiscal 1984, así como de los 123 de los 132 millones de ayuda militar para el año fiscal 1985 y los 180 de los 210 millones de ayuda económica para ese año fiscal. Algunos observadores consideran que en el cambio de actitud del Congreso norteamericano incidieron la elección del demócratacristiano Napoleón Duarte y las intensas gestiones que recientemente desplegara ante ese Congreso el jefe del Comando Sur del Ejército norteamericano, Paul Gorman, quien se considera desempeña un papel fundamental en la implementación de la estrategia militar, norteamericana en América Central. En torno a la propuesta de diálogo del FMLN-FDR, continuaron las expectativas a nivel internacional. Sin embargo, a pesar de las posiciones de Duarte a favor de iniciar el diálogo, no realizaron por su parte acciones concretas.

HONDURAS

Este país es considerado un punto clave para la estrategia militar norteamericana en Centroamérica, y desde hace dos años se ha convertido en una base de operaciones para las fuerzas antisandinistas apoyadas y dirigidas por la CIA. Además ha sido escenario de extensas y amplias maniobras militares conjuntas de los ejércitos de los Estados Unidos, El Salvador y Honduras, y es sede del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), a cargo de los norteamericanos.

La nueva cúpula militar se plantea seguir desempeñando el papel de fiel aliado para la estrategia estadounidense en la región. En este sentido está dada la continuación en territorio de ese país de las maniobras militares y la permanencia de tropas yanquis en su territorio. Sin embargo, dentro del seno de las Fuerzas Armadas hondureñas existe una corriente mayoritaria que se pronuncia a favor de que se anule todo tipo de ayuda a las Fuerzas Armadas de El Salvador, pues aún subsiste el resentimiento creado entre ambos ejércitos como resultado de la guerra de 1969 y de la negativa de El Salvador de solucionar el problema fronterizo que provocó el incidente.

Fue significativo el anuncio hecho el día 28 de septiembre por el vocero del Departamento de Estado, Allan Romberg, de que los Estados Unidos respetarán la decisión del gobierno hondureño de no permitir que ningún personal militar extranjero curse estudios en el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) hasta tanto se establezca permanentemente una instalación regional.

Finalmente, la posición hondureña respecto al Acta de Contadora, como era de esperarse, es la de revisarla y no firmarla tal cual está.

COSTA RICA

Durante el trimestre, los acontecimientos más importantes en el país y en sus relaciones con los Estados Unidos fueron una severa crisis a nivel de gobierno, la introducción de armamentos sofisticados nunca vistos y el acuerdo firmado para la instalación de una potente radioemisora en la zona fronteriza con Nicaragua.

La crisis del Gabinete giró en torno a los cambios que plantearan en política interna y externa los grupos de poder económico más importantes del país. Estos grupos presentaron un documento que exigía de forma implícita la renuncia de los funcionarios simpatizantes de la Revolución Nicaragüense y una respuesta a sus consideraciones sobre aspectos socioeconómicos, de seguridad nacional y de política exterior.

La situación planteada provocó la renuncia plena del Gabinete del gobierno para, supuestamente, dejar al presidente Monge en libertad de realizar los cambios más convenientes. Fueron removidos algunos funcionarios de sus cargos, entre los cuales se encuentra el titular de la Seguridad Pública.

Este trimestre se conoció que el gobierno recibirá un lote de armamentos sofisticados nunca antes vistos en el país. El nuevo cargamento bélico sustituirá, entre otros, toda la fusilería del país por modernos equipos mecanizados, y ocho modernos helicópteros de la Fuerza Aérea norteamericana.

El 31 de agosto el embajador norteamericano, Curtin Windsor, y un grupo de empresarios norteamericanos firmaron un acuerdo para instalar en este país una potente radioemisora en la zona norte fronteriza con Nicaragua.

Al respecto el presidente Monge dijo que ese acuerdo respondía a una inquietud suya planteada a Reagan, ante el bombardeo ideológico por parte de las radioemisoras nicaragüenses a que están sometidos los costarricenses en la zona norte. Al propio tiempo, negó que su instalación comprometía la neutralidad de Costa Rica y expresó que “sólo queremos defender la soberanía radiofónica de Costa Rica y resaltar sus valores democráticos” .

Finalmente, el gobierno de Monge (quien al principio había expresado su acuerdo ala firma del Acta Revisada de Contadora) puso reparos a la misma después de que el 21 de septiembre Nicaragua la firmara.

GUATEMALA

En la primera semana de julio el canciller de Guatemala, Fernando Andrade, en declaraciones hechas al periódico norteamericano The New York Times aclaró que su país no tomará parte en las maniobras militares conjuntas con tropas de los Estados Unidos y que apoya fuertemente el proceso de paz de Contadora.

El Canciller describió la política exterior guatemalteca como “una posición independiente” y dijo que la paz en la región era inalcanzable antes de la retirada de todos los asesores militares extranjeros. Explicó que Centroamérica necesita una solución política y que “estamos opuestos a emprendimientos militares”, pues “tratamos de mantener una correcta y respetable relación con Nicaragua”.

Las relaciones entre los Estados Unidos y este país mostraron en este trimestre un nivel significativo, y prueba de ello fue la designación del nuevo embajador norteamericano Alberto Martínez, diplomático de origen cubano nacionalizado estadounidense.

El 11 de agosto, el nuevo Embajador, a su arribo a Guatemala, se mostró interesado por las recientes elecciones para la Asamblea Constituyente en Guatemala y dijo presenciar “cómo el pueblo guatemalteco ha iniciado el arduo proceso de renovación de sus instituciones democráticas y está en vías de retornar a la forma constitucional de gobierno”.

Continuando los elogios, Martínez enfatizó que la Casa Blanca reconoce la valiosa labor del actual gobierno, que ha hecho posible un proceso electoral “limpio” y “abierto” que no ha dejado de ser admirado por los numerosos observadores internacionales que asistieron a los comicios.

El 15 de agosto, coincidiendo con la normalización de las relaciones entre ambos países, el Canciller guatemalteco anunció que el Congreso norteamericano entregará 20 millones de dólares de ayuda económica inmediata a Guatemala. Al respecto agregó que el Congreso norteamericano aprobó esa suma en vista de la evolución experimentada por el gobierno militar hacia la democratización del país. Andrade expresó que dicha comunicación fue transmitida por el nuevo embajador, Alberto Martínez. Esos millones de dólares se añaden a los 65 millones en programas de asistencia económica de la administración Reagan a Guatemala, mediante la Agencia Internacional de Desarrollo (AID).

Finalmente se anunció que en cuanto a la ayuda militar, esta se programa realizar con un monto de 10,5 millones de dólares.

Es importante significar que después de que meses atrás el gobierno de ese país, en declaraciones públicas se había opuesto a participar en el CONDECA, asistió a una reunión de esa institución en Panamá. Aceptó, además, la presencia en sus puertos y costas del Pacífico de tres buques de guerra norteamericanos y del acorazado “Iowa”, que realizaban maniobras militares dirigidas a una eventual acción contra Nicaragua.

PANAMÁ

La salida de la “Escuela de las Américas” con toda la infraestructura de la base de Fort Gulick —como parte de los acuerdos Torrijos-Carter— creó grandes expectativas durante este trimestre. El 24 de septiembre un vocero del Comando Sur de los Estados Unidos informó que dicha Escuela se encontraba en fase de desmantelamiento. El día 22 del propio mes se había efectuado la última graduación de 92 cadetes procedentes fundamentalmente de Honduras y El Salvador.

El 30 de septiembre, finalmente, el Pentágono hizo entrega a Panamá de la instalación donde radicó la “Escuela de las Américas”, la cual estuvo operada durante 38 años por el ejército norteamericano. Esta entrega forma parte de los acuerdos suscritos después de largas negociaciones con los Estados Unidos, y como resultado de la presión ejercida por importantes sectores populares panameños.

MÉXICO

A mediados del mes de julio el legislador y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano, Gonzalo Martínez Corbalá, refiriéndose a la Ley Simpson-Mazzoli, reclamó que para reglamentar una legislación que afecta a los indocumentados que cruzan la frontera hubiera sido necesario realizar consultas previas y determinar las consecuencias que podrían acarrear para ambos países. Sobre el contenido de la ley subrayó que no solamente pretende contener el problema de los trabajadores migratorios hacia territorio estadounidense, sino que lastima a toda la comunidad latinoamericana.

Durante el mes de agosto se hicieron más evidentes los vínculos entre la administración Reagan y el opositor Partido Acción Nacional (PAN), que representa los sectores más reaccionarios de ese país, cuando esa organización política fue invitada a la Convención Republicana de Dalias, Texas, que postuló a Reagan para su reelección como Presidente de los Estados Unidos.

El Partido Acción Nacional (PAN) fue incluido también el llamado “programa republicano de fortalecimiento de la democracia en América Latina”, que pretende apoyar a los partidos derechistas aliados de Estados Unidos, para, según ellos, ampliar la participación política en las naciones del área.

Los representantes de la Embajada de los Estados Unidos en México han estado realizando desde 1983 conversaciones con representantes del PAN. Con John Gavin, embajador norteamericano en ese país, este partido el año pasado sostuvo conversaciones de las elecciones municipales que se realizaron en los estados fronterizos con Estados Unidos y en las que por primera vez el Partido Acción Nacional ganó siete presidencias municipales, incluyendo dos capitales estatales.

En esta oportunidad, Gavin sostuvo una reunión con el alcalde de Hermosillo, capital del estado fronterizo de Sonora, Casimiro Navarro, y con el arzobispo Carlos Quintero Arce.

A pesar de que la Constitución mexicana prohíbe la participación de la Iglesia en la política nacional, la alta jerarquía eclesiástica se ha acercado a este partido, y según propias expresiones del panista alcalde de Hermosillo, esto se debe a que “hay coincidencia en los principios” entre su partido y la Iglesia. Estas frecuentes reuniones entre John Gavin y representantes del Partido Acción Nacional (PAN), donde se han tratado asuntos referentes a la política interna mexicana, han sido fuertemente criticadas por altos funcionarios gubernamentales y por el gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A mediados de septiembre, con motivo de las reiteradas injerencias del embajador Gavin en la política interna de México, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó abiertamente las declaraciones que ha estado realizando el diplomático sobre política interna. El máximo dirigente de la principal organización política mexicana calificó de “imprudentes” las declaraciones del representante de la administración Reagan y advirtió que debe abstenerse de hablar sobre la vida política de México.

Es importante significar que el partido Republicano de los Estados Unidos — al que pertenecen Reagan y Gavin— se pronunció en su última Convención por “una mayor participación de la oposición de derecha en el sistema político mexicano”.

CARIBE GRANADA

En esta isla se han desarrollado actividades relativas al proceso electoral que se quiere realizar.

Con este fin se concertó una alianza de tres partidos de centro-derecha, producto de la cual se constituyó el Nuevo Partido Nacional (NPNJ, como resultado de la actividad y las presiones de la administración norteamericana en alianza con los países títeres de la región.

Esta reunión de carácter secreto se efectuó a finales de agosto en la isla Unión, de San Vicente. En ella participaron los primeros ministros de Barbados, Santa Lucía y San Vicente. Se fusionaron en la nueva organización. el Partido Nacional de Granada, de Hebert Blaize; el Movimiento Democrático de Granada, dirigido por Francis Alexis; y el Partido Nacional de George Brizan. Este último fue miembro del Movimiento de la Nueva Joya antes del triunfo de la Revolución Granadina en 1979, y es considerado un elemento de centro-derecha. El Nuevo Partido Nacional (NPN) que se constituyó quedó encabezado por Hebert Blaize. Agencias de prensa internacionales señalaron que el acuerdo tiene como fin buscar una alternativa al partido del exdictador Eric Gairy, y al propio tiempo cerrar las posibilidades al Movimiento Patriótico Maurice Bishop (MPMB), encabezado por Radix.

Al conocerse de la reunión, el Movimiento Patriótico Maurice Bishop denunció que tal hecho era una interferencia en los asuntos internos de Granada por parte de los Estados Unidos y los gobiernos lacayos de la región. El MPMB anunció además su decisión de participar en la contienda electoral a celebrarse, según se anunció por el gobierno provisional de la isla, el 3 de diciembre de este año. La decisión del MPMB fue ampliamente difundida en Granada por los dirigentes Radix y Louisson.

Ella obedece, según se planteó, a la petición de varios miles de simpatizantes que no quieren el regreso de Gairy ni la alianza pronorteamericana de centro-derecha integrada en el NPN.

A fines de septiembre terminó sus estudios el primer grupo de 35 policías granadinos, reclutados con el fin de formar parte de la Unidad de Servicios Especiales en el país. El curso fue impartido por un instructor norteamericano y otro de Antigua y, paradójicamente, se utilizaron las barracas de los constructores cubanos en el área del aeropuerto de Point Salines. Esta primera fase del programa de entrenamiento tiene como objetivo seleccionar a los mejores candidatos que en febrero del próximo año recibirán un curso superior que les permita, una vez integrados a la Unidad de Servicios Especiales, combatir pequeñas infiltraciones de elementos “hostiles” en esa isla. Durante el trimestre el gobierno siguió favoreciendo la búsqueda del refinanciamiento de su deuda externa.

En el mes de junio se dio a conocer que el gobierno de ese país cancelará 6 200 empleos públicos como condición para recibir un crédito del FMI. La reducción de personal se llevará a efecto a través de despidos masivos de

personal, el estímulo de los retiros prematuros y la no cobertura de las vacantes que se produzcan. Esto afecta gravemente a varios sectores de la población, incluidos trabajadores de las instancias de la administración pública.

REPÚBLICA DOMINICANA

Las protestas populares siguen marcando la vida de ese país. En el mes de agosto se realizó una manifestación estudiantil contra el alza de los precios de los libros de texto de un 150% y el aumento de las tarifas del transporte en un 66%. Nuevamente se hizo sentir la represión policial, dejando un saldo de un muerto, 4 heridos y 20 jóvenes detenidos.

La deuda externa global de la República Dominicana, incluyendo el sector público, asciende actualmente a 2 500 millones de dólares y es uno de los factores que influyen en el creciente deterioro económico que sufre esa nación. Las drásticas condiciones impuestas por el FMI —que afectan a amplios sectores populares de ese país— aumentaron las protestas populares, que han sido rechazadas violentamente por las autoridades dominicanas.

Reagan demandó a Jorge Blanco a que firme con el FMI un acuerdo para la aplicación del segundo año de vigencia de facilidad ampliada, que es rechazado por sectores empresariales, sindicales, políticos, profesionales y estudiantiles. El Presidente norteamericano condicionó la reanudación de desembolsos de la denominada ayuda estadounidense a la República Dominicana, a que esta firme el acuerdo con el FMI. El gobierno estableció una fórmula dilatoria conocida como “Acuerdo Puente”, que permitiría instrumentar paulatinamente las medidas fundamentales para llegar a un acuerdo Stand By por un año, y así evitar nuevos estallidos populares.

El impacto de las protestas de abril puede medirse a través del reforzamiento acelerado de las instituciones armadas y de seguridad bajo asesoría norteamericana, y la propuesta de varias fórmulas políticas como el proyecto planteado por Joaquín Balaguer de un gobierno bipartidista, o los planteamientos realizados por el líder socialdemócrata Peña Gómez referentes a su posible postulación para los comicios de 1986.

BELICE

Durante el trimestre se llevó a cabo la instalación de una estación retransmisora de “La Voz de las Américas” (VOA) de los Estados Unidos en ese país. Esta instalación se realizó en base a un acuerdo firmado entre el gobierno de Belice, encabezado por George Price, y los Estados Unidos. Este hecho, unido a la existencia de los Cuerpos de Paz, denota el continuo incremento de la influencia de los Estados Unidos en este país.

VENEZUELA

Durante el trimestre se mantuvieron las relaciones con los Estados Unidos al mismo nivel que en los dos trimestres anteriores. Se siguieron dando algunas discrepancias en cuanto a los problemas del refinanciamiento de la deuda externa en este país.

COLOMBIA

Durante el trimestre se hicieron palpables las concesiones colombianas a las autoridades norteamericanas en materia de narcotráfico.

En el mes de agosto el gobierno de los Estados Unidos solicitó la extradición de Pablo Escobar Gaviria y de Jorge Luis Ochoa, considerados dos de los principales jefes de las bandas de narcotraficantes que operan en Colombia. Escobar y Ochoa huyeron a Panamá luego del asesinato el 30 de abril del Ministro de Justicia colombiano. La extradición fue solicitada por los Estados Unidos a través de su embajador, Lewis Tambs, quien junto a la formulación de la solicitud entregó además al nuevo ministro de Justicia colombiano, Enrique Parejo González, una abultada documentación de los cargos que obran contra ambos narcotraficantes.

Internamente se desarrolló una intensa lucha contra los narcotraficantes, lo que motivó la felicitación pública del presidente Reagan alentando las acciones represivas de la administración colombiana. Este comercio de carácter ilegal produce una gran evasión de capitales que inciden sensiblemente y en forma negativa sobre la disminución de divisas en ese país.

ECUADOR

El 10 de agosto, el vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush, llegó a la ciudad de Quito para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente ecuatoriano, León Febres Cordero.

En este trimestre se realizó el XVII Congreso de la Confederación de Trabajadores de Ecuador (CTE), durante el cual se calificó de oligárquico y proimperialista al nuevo gobierno. En el Documento Central del Congreso se expresó: “La política económica del nuevo gobierno, basada en los principios del neoliberalismo, será sin lugar a dudas de graves consecuencias para la clase obrera y para el país”.

BOLIVIA

El 31 de julio, la Embajada norteamericana en ese país rehusó responder a acusaciones de que su personal tenía conocimiento de la intentona golpista del pasado 30 de junio, que se inició con el secuestro del presidente Siles Suazo.

El dirigente de la Central Obrera Boliviana, Reynaldo Venegas, detenido a raíz de los acontecimientos, declaró a las autoridades que la Embajada de los Estados Unidos conocía los preparativos del golpe por lo menos con diez días de antelación.

Las medidas económicas tomadas el trimestre anterior por el acuerdo COB-gobierno para afrontar la severa crisis nacional, fracasaron.

Esta medida —que incluyó entre otras, la decisión de postergar el pago de la deuda con la banca privada—, generó manifestaciones de comprensión y apoyo pero en términos prácticos no se registraron acciones de ayuda concreta.

El Bank of America, entidad bancaria vocera de los 128 bancos acreedores del país, finalmente fijó su posición y le dio al gobierno boliviano un plazo hasta el primero de octubre para que efectúe los pagos correspondientes. De lo contrario Bolivia está amenazada con la aplicación de un embargo internacional.

Esta situación ha motivado la decisión del gobierno de negociar su deuda con el Fondo Monetario Internacional con el fin de buscar una salida a la difícil coyuntura.

PERÚ

En el mes de agosto, en una entrevista concedida a un periodista argentino, el presidente Belaunde Terry lamentó que el proteccionismo estadounidense continúa perjudicando al comercio exterior peruano, y se refirió concretamente a las restricciones impuestas a los productos textiles y las amenazas norteamericanas de imponer también restricciones a las importaciones del cobre en este país.

La situación económica peruana no ha presentado mejorías. Actualmente en el país existe un 60% del desempleo y subempleo en el conjunto de la población económicamente activa.

El presidente Belaunde Terry continuó realizando gestiones con el presidente norteamericano Ronald Reagan con el fin de obtener nuevos préstamos para poder cubrir los servicios de la deuda externa, que vencerán entre el segundo semestre en curso y principios del próximo año.

BRASIL

Durante el trimestre siguieron las contradicciones existentes entre este país y los Estados Unidos en el plano económico y en este sentido lo relativo al mantenimiento de las medidas proteccionistas norteamericanas a la exportaciones brasileñas de acero, café y calzado, renglones importantes de la economía del brasil.

En el plano de política externa continuó el distanciamiento entre la política brasileña y la norteamericana en relación a la solución de la crisis centroamericana.

ARGENTINA

En el mes de julio, en el marco de la Comisión Mixta argentino-estadounidense, el secretario de Comercio Local, Ricardo Campero, hizo un llamado a los países industrializados a tomar conciencia de que “la tendencia alcista de las tasas de interés y la política restrictiva en materia comercial ponen en peligro la estabilidad de los países subdesarrollados”. También fustigó la falta de comprensión para con los países endeudados y señaló su preocupación por las restricciones impuestas al acero argentino para su ingreso en el mercado norteamericano.

La publicación por medios de prensa norteamericanos de un Memorandum “secreto” del embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Frank Ortiz dirigido al Departamento de Estado norteamericano, donde se critica entre otras cuestiones, la gestión económica de la administración argentina y la “lentitud” con que el presidente Alfonsín trata las negociaciones con el FMI, se convirtió en Argentina en un escándalo público del cual se hizo eco la prensa de ese país.

El embajador Frank Ortiz celebró una rueda de prensa en Buenos Aires con motivo del anuncio de la posible inversión de capitales norteamericanos en la provincia de Córdoba. En el marco de esta actividad, y ante la pregunta de la existencia o no del Memorandum “secreto”, que, según afirma la prensa norteamericana, fue elaborada por su Embajada, Ortiz respondió que tales versiones eran inciertas. Afirmó además que no existe ningún malestar del gobierno argentino con respecto a su misión diplomática. “Las relaciones con los Estados Unidos son excelentes”, dijo.

Durante el trimestre, después de controvertidas negociaciones en cuanto al refinanciamiento de la deuda de ese país, el Presidente argentino aceptó un acuerdo con el FMI a través de un Memorandum de entendimiento. El acuerdo se ajusta al tradicional esquema recesivo del FMI, que significará un gran costo social para el país.

A fines del trimestre el mandatario argentino visitó la ciudad de Nueva York, donde intervino en la 39 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Se entrevistó también con el presidente norteamericano, Ronald Reagan y además por iniciativa de Henry Kissinger Se entrevistó con representantes de la banca norteamericana.

Al anunciar la visita Reagan-Alfonsín, la Casa Blanca destacó su beneplácito por el retorno de la Argentina a la democracia y destacó que bajo el liderazgo

del nuevo Presidente electo, ese país sureño se había puesto a la cabeza del continente. Aunque se desconocen los detalles tratados durante la reunión entre ambos mandatarios, se deduce que fueron establecidas las premisas necesarias para una evolución satisfactoria de las relaciones entre ambos países.

PARAGUAY

Durante el trimestre se notó un incremento de la actividad opositora al dictador Alfredo Stroessner. Esta situación es de gran interés para los Estados Unidos, que esperan convertir al país sureño en la Honduras del Cono Sur ante la alternativa de que en la convulsa región pueda desarrollarse un movimiento popular y progresista peligroso para los intereses norteamericanos.

URUGUAY

Durante el trimestre la política norteamericana no tuvo cambios en relación a los trimestres anteriores. Continuó la posición de apoyo de los Estados Unidos al proceso de democratización que se está efectuando en el Uruguay y a las elecciones que con ese fin se realizarán en ese país.

CHILE

Durante el trimestre las relaciones entre este país y los Estados Unidos se han mantenido en el mismo nivel que los semestres anteriores. Aunque continúan las discretas contradicciones entre el régimen y la administración norteamericana relativas al tránsito hacia algunas formas democráticas en ese país suramericano y las presiones que en este sentido han hecho los Estados Unidos, el régimen de Pinochet sigue contando con el apoyo político de la administración Reagan; muestra de ello fue que los Estados Unidos eliminaron las barreras arancelarias norteamericanas al cobre chileno. Esto representa un respiro para los exportadores cupríferos de ese país.

Octubre-Diciembre

CENTROAMÉRICA NICARAGUA

El 1 de octubre, el comandante Bayardo Arce Castaño, coordinador de la Dirección Política del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), denunció que el gobierno de los Estados Unidos había iniciado una nueva ofensiva militar contra Nicaragua. La ofensiva tiene como objetivo ocupar las ciudades de Estelí, Somoto y Ocotal, en la región norte, con la apertura de un frente sur fronterizo con Costa Rica que inició sus operaciones atacando el puerto fronterizo de Peñas Blancas.

El 2 de octubre, en comparecencia ante la Organización de Naciones Unidas, el comandante Daniel Ortega enfatizó en la urgencia de que Estados Unidos firme el protocolo de Contadora y la disposición del pueblo nicaragüense a defender y luchar por la paz y por su soberanía. En su discurso el comandante Ortega expresó: “La ofensiva está lista a desarrollarse a partir del 15 de octubre del presente año y ya están concentradas las fuerzas mercenarias de la CIA y el Pentágono en territorios fronterizos con Nicaragua, desde Honduras y Costa Rica. También están listas las fuerzas norteamericanas para el eventual bombardeo, desembarco e incursión directa sobre Nicaragua. Están preparados los gobiernos centroamericanos que llevarán la formalidad de solicitar la “ayuda” de los Estados Unidos, para extirpar la “amenaza sandinista” del área. Y también está listo el Paul Scoon, es decir, el títere que supondría ser el futuro Presidente de los Estados Unidos en Nicaragua. Tienen a los actores en sus respectivos sitios, con sus papeles memorizados. Ya están hechos también los cálculos de las bajas norteamericanas al realizarse la intervención. Se trata de repetir la obra vergonzosa de Granada, ahora contra Nicaragua”.

El 29 de octubre, el secretario de Estado Shultz se entrevistó en Washington con el dirigente opositor nicaragüense Arturo Cruz y con otros representantes de la denominada Coordinadora Democrática (CD).

Según indicó el vocero del Departamento de Estado, Alan Romberg, durante la reunión Shultz reiteró el apoyo de la administración norteamericana a los grupos opuestos a la Revolución Sandinista y su satisfacción por la decisión de la Coordinadora Democrática de retirarse de las elecciones convocadas para el 4 de noviembre.

En el plano de las conversaciones entre los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua, en Manzanillo, a partir de la sexta ronda de conversaciones, Nicaragua ha arreciado sus posiciones motivada por las pretensiones norteamericanas de exigir en la práctica la capitulación de la Revolución, mientras que públicamente la parte norteamericana ofrecía una imagen negociadora con fines netamente electorales.

El 30 de octubre se reanudaron las conversaciones entre ambos gobiernos, conocidas como el “Diálogo de Manzanillo”. Esta séptima ronda se efectuó en medio del incremento de una campaña norteamericana de hostigamiento contra la Revolución Sandinista en momentos en que se desarrolla la fase final de las elecciones más importantes a efectuarse en Nicaragua. En esta reunión trascendió que las proposiciones norteamericanas estuvieron encaminadas a exigir que Nicaragua reduzca su armamento, retire los asesores militares, claudique su apoyo al movimiento revolucionario salvadoreño, suspenda las elecciones hasta marzo de 1986 —plazo en que exigen se produzca un alto al

fuego de la contrarrevolución y el inicio de negociaciones entre el Frente Sandinista y los jefes contrarrevolucionarios— y el establecimiento de negociaciones con la contrarrevolución, similar al diálogo entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno salvadoreño del presidente Duarte.

El 4 de noviembre se realizaron las elecciones en Nicaragua en un clima de júbilo popular. La campaña electoral y la realización de elecciones constituyeron para el Frente Sandinista un considerable esfuerzo político y económico en medio del desgaste que produce la agresión y la situación económica interna. Sin embargo, el proceso electoral fortaleció el apoyo internacional a la Revolución, legitimó el poder revolucionario conquistado por el pueblo con las armas, permitió institucionalizar la Revolución por un período de seis años, y abrió el proceso de una nueva Constitución.

El 19 de noviembre se inició en México la octava ronda de negociaciones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Esta reunión estuvo precedida por el agravamiento de las tensiones entre ambos países, particularmente por la violación del espacio aéreo nicaragüense por aviones norteamericanos. Coincidió además con la crisis artificial creada por la administración Reagan alrededor de su supuesto cargamento de aviones soviéticos de combate para las Fuerzas Armadas Sandinistas.

La novena ronda de negociaciones, efectuada a partir del 10 de diciembre, no dio indicios de que el diálogo pueda convertirse en negociaciones de los muchos puntos de fricción que enturbian las relaciones entre ambos países. Muestra de ello fue el anuncio de la administración Reagan legalizando la ayuda privada de los Estados Unidos a las fuerzas contrarrevolucionarias que actúan en Nicaragua, en el preciso instante en que se celebraba esta nueva ronda de conversaciones. A juicio de muchos analistas, los Estados Unidos toman con poca seriedad el diálogo con los sandinistas.

EL SALVADOR

En el mes de octubre fue significativa la visita realizada por el secretario de Estado norteamericano, George Shultz, para entrevistarse con el presidente Duarte y otras autoridades gubernamentales. Al finalizar la misma, Shultz y el canciller salvadoreño Jorge Eduardo Tenorio firmaron un comunicado conjunto en el que se especifica que ambos países consideran necesario introducir una serie de cambios en el Acta Revisada de Cantadora.

Al propio tiempo la declaración reitera el apoyo norteamericano a la decisión anunciada días atrás en la Organización de Naciones Unidas (ONU) por Duarte de aceptar un diálogo con las guerrillas de su país.

Uno de los acontecimientos más importantes en la vida política de El Salvador lo constituyó la primera reunión celebrada el 15 de octubre entre los representantes de la guerrilla y el gobierno salvadoreño.

Esta reunión, celebrada en La Palma, localidad del Departamento de Chalanenango, fue presidida por Guillermo Ungo, presidente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte.

Ambas partes firmaron un comunicado conjunto en el cual se comprometen a laborar en pro del restablecimiento de la paz en esa nación y conformar una comisión, contando con la participación de la Iglesia como mediadora, a fin de alcanzar ese objetivo con el respaldo del pueblo salvadoreño; se fijó un nuevo contacto para la segunda quincena de noviembre.

En la segunda quincena de octubre, el fuego antiaéreo guerrillero abatió un avión de la CIA que apoyaba una operación helitransportada en el departamento de Morazán.

A mediados de noviembre, el ejército salvadoreño inició una gran operación militar en las principales carreteras de los principales departamentos orientales del país. Desde mediados de octubre el ejército salvadoreño ha estado lanzando acciones ofensivas contra los combatientes salvadoreños, quienes han sabido rechazar eficazmente los ataques.

El 20 de noviembre, como estaba previsto, se celebró la segunda parte del diálogo entre la guerrilla y el gobierno de El Salvador. En esta reunión celebrada en la localidad de Ayagualo, el FDR-FMLN presentó al gobierno salvadoreño un plan denominado “Propuestas Globales para la Solución Política Negociada y la Paz” encaminado a resolver la crisis nacional.

A principios de diciembre las propuestas de paz presentadas en Ayagualo por la guerrilla salvadoreña al gobierno, fueron tajantemente rechazadas por Duarte.

Para el FMLN-FDR el diálogo significó el reconocimiento implícito de existencia de dos poderes en el país.

En el trimestre se preparó una gran ofensiva militar contra la guerrilla de este país, pero se produjeron cambios adversos a la política norteamericana en la región. Estos están dados primeramente por la firma del Acta de Contadora por Nicaragua; la derrota de la ofensiva del ejército salvadoreño por la acción defensiva de la guerrilla, que al propio tiempo lanzaba sus acciones ofensivas contra el enemigo, y finalmente la aceptación del FMLN-FDR de iniciar el diálogo con Duarte. Estos hechos rompen con el ritmo de ofensiva política militar de los Estados Unidos en este último período.

HONDURAS

En el mes de noviembre, en Washington, el ministro hondureño de la Presidencia, Ubodoro Arriaga, afirmó que las conversaciones a realizarse en esa ciudad tienen como objetivo revisar los convenios militares suscritos con los Estados Unidos en 1954, cuando en la región no había conflictos, ni las condiciones geopolíticas actuales.

El gobierno norteamericano, especialmente a partir del triunfo de la Revolución Nicaragüense, ha realizado esfuerzos encaminados a alterar la correlación de fuerzas favorable a los pueblos centroamericanos.

Honduras cumple un papel fundamentalmente estratégico, tanto por su situación geográfica como por la disposición de sus fuerzas armadas y la actuación de los círculos gobernantes hondureños acorde con los planes norteamericanos para la realización de estos objetivos.

En los últimos tres años, los Estados Unidos han desplegado en este territorio alrededor de 15 000 efectivos de sus fuerzas armadas para la participación en distintas maniobras bélicas y la construcción de cerca de once instalaciones militares en este país.

La presencia militar estadounidense se presenta bajo la cobertura de ayuda militar a Honduras y ha servido en los últimos tiempos para preparar la infraestructura necesaria con el fin de convertir el territorio hondureño en una plaza militar norteamericana sólidamente asentada en el centro de la región. Actualmente las Fuerzas Armadas norteamericanas cuentan en ese país con unos 8 aeropuertos militares, uno de ellos situado en la zona fronteriza con El Salvador y otro cerca de la frontera con Nicaragua.

En 1983 se instaló en Puerto Castilla el Centro de Entrenamiento Militar y se amplió la base de Palmerola a 100 km al norte de Tegucigalpa. así como la pista de Trujillo.

Durante las maniobras “Pino Alto II” se construyeron dos aeropuertos en San Lorenzo, en la costa del Océano Pacífico, y en Aguacate, en el Departamento Olancho fronterizo con Nicaragua.

Con las maniobras de este año “Granadero I”, ingenieros estadounidenses dirigieron la construcción de las pistas aéreas de Jamastrán, en el Paraíso, a sólo 20 km de Nicaragua, y el de Guyana, en la zona limítrofe con El Salvador y Guatemala.

Por otra parte, los Estados Unidos mantienen varias bases de entrenamiento y operaciones de bandas antisandinistas que incursionan permanentemente sobre territorio nicaragüense, y desde aeropuertos hondureños despegan aviones espías que sobrevuelan las posiciones de los rebeldes salvadoreños y violan el espacio aéreo de Nicaragua.

Durante el mes de noviembre, como parte de la ayuda militar norteamericana, Honduras recibió 24 helicópteros norteamericanos, entre ellos, seis del tipo CHINOOCK con capacidad para transportar 60 hombres armados cada uno. A finales del trimestre, fuerzas combinadas de ambos países realizaron siete maniobras militares como preparación de los grandes simulacros de guerra conjuntos que se proyectan llevar a efecto en 1985.

COSTA RICA

En la primera quincena del mes de noviembre, el general Paul Gorman, jefe del Comando Sur del ejército norteamericano, con sede en Panamá, realizó una visita de inspección a la zona norte de este país y sostuvo conversaciones con representantes de la policía nacional. Gorman estuvo acompañado por los viceministros de Gobernación, René Castro, y de Seguridad Pública, Johnny Campos.

Refiriéndose a la visita de Gorman, el presidente de Costa Rica, sin dar mayores detalles, durante una conferencia de prensa realizada en las afueras de San José precisó que Gorman visitó la zona norte para examinar sobre el terreno la ayuda norteamericana que requieren los guardias civiles acantonados en la frontera con Nicaragua.

En la misma conferencia, el Presidente se refirió a un nuevo cuerpo policial especializado en acciones antiterroristas y expresó que para ello se requerirá de equipos especializados, sistemas de computación y un entrenamiento constante.

A fines del mes de diciembre, en conferencia de prensa, el presidente de este país, Luis A. Monge, confirmó que los Estados Unidos le habían propuesto ayuda económica a su país en un monto igual que la ayuda militar. También anunció que su país en 1985 iniciará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tendientes a conseguir préstamos por más de 50 millones de dólares.

GUATEMALA

En la segunda quincena de noviembre el Presidente de este país anunció que la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) le entregó un millón de dólares a su gobierno para las comunidades rurales, lo cual fue calificado por el mandatario como una muestra de confianza de la administración Reagan. Este hecho, según algunos observadores, evidencia un acercamiento recíproco y significa al mismo tiempo el visto bueno de Washington a la política contrainsurgente del régimen, pues esa cifra será invertida en las “aldeas modelos” donde se concentra compulsivamente a la población indígena en un intento por restarle base social a la guerrilla.

El primero de octubre se informó que los cancilleres de la Comunidad Económica Europea (CEE) conocieron de la grave situación política que sufre Guatemala, donde más de cien mil niños quedaron huérfanos en los últimos meses, según datos suministrados por organismos humanitarios.

En la reunión de cancilleres de Estados Europeos, que se efectuó durante los días 28 y 29 de septiembre, fue entregado un extenso documento donde se exponía la situación política del país centroamericano. El documento indicó además que desde julio de este año se habían presentado más de mil denuncias, todas declaradas sin lugar en los tribunales guatemaltecos.

El 11 de octubre el gobierno guatemalteco se pronunció a favor de la versión revisada del Acta de Contadora, cuyo plazo vencía el 15 de octubre, y se manifestó a favor de continuar aportando ideas y sugerencias para que culmine con éxito la mediación pacificadora. El 15 de octubre vencía el plazo establecido para fijar posiciones por parte de los gobiernos del área.

Es indudable que el Congreso de los Estados Unidos adoptó una política más flexible con este país a partir de la realización de las elecciones para la Asamblea Constituyente, celebradas el primero de julio de este año.

Para el año fiscal 1985, que comenzó el primero de octubre de 1984, el Congreso norteamericano aprobó la cantidad de 70 millones de dólares en asistencia económica a este país centroamericano. Además, e independientemente de esta cifra, el presidente Reagan pidió algo más de 10 millones para desarrollar, entre otros rubros, un programa de entrenamiento militar.

Estos hechos, unidos a las declaraciones del embajador norteamericano en Guatemala, Alberto Martínez, en las que plantea que en ese país se han obtenido logros en el campo de los derechos humanos y la citada democratización en Guatemala, sin lugar a dudas son una muestra de la aproximación de la administración norteamericana a ese país, en su deseo de que el gobierno de Mejía se ubique incondicionalmente a favor de la política norteamericana en Centroamérica.

Guatemala no se ha sumado aún al bloque de países que se oponen a Nicaragua en el marco de las posiciones del Grupo de Contadora.

MÉXICO

El día 11 de octubre, horas antes de anunciarse la visita del secretario de Estado norteamericano, George Shultz, la Cancillería mexicana difundió, por primera vez, el texto revisado del Acta de Contadora.

Algunos gobiernos centroamericanos, siguiendo las pautas trazadas por los Estados Unidos, pusieron reparos al texto del Acta y amenazaron tácitamente con boicotear el esfuerzo realizado por los cancilleres de Contadora.

El plazo establecido para que los países centroamericanos realizaran sus observaciones antes de ser firmadas y entrar en vigor para toda la región, vence el 15 de octubre.

Fue significativo que la publicación del texto del Acta Revisada de Contadora se realizara antes del arribo a ese país de Shultz. Al respecto, en medios diplomáticos se comentó que seguramente el secretario del Departamento de Estado realizaría observaciones de la administración Reagan al Acta de Paz propuesta por Contadora.

El día 12 de octubre, el Presidente de México recibió a la delegación norteamericana encabezada por George Shultz, con quien conversó sobre la situación internacional, la crisis regional centroamericana y otros aspectos de tipo financiero y económico.

A mediados del mes de diciembre fueron sorprendidos por la armada mexicana dos barcos camaroneros norteamericanos con los aperos en el agua y centenares de kilogramos de camarón y otras especies en sus bodegas.

Hechos como este son frecuentes desde que México decidió no renovar los acuerdos mediante los cuales la flota pesquera norteamericana pescaba libremente el atún y el camarón en los mares mexicanos.

Desde hace seis años, la decisión soberana de México fue contestada por los Estados Unidos con un inmediato embargo contra las exportaciones del atún y camarón mexicanos, y esto es lo que se conoce mundialmente como la “guerra del atún”.

Durante varios años este ha sido uno de los tantos problemas en las negociaciones bilaterales mexicano-norteamericanas, en las cuales no se ha llegado aún a ningún acuerdo, debido a que los Estados Unidos rechazan el legítimo derecho del país azteca para explotar con preferencia sus recursos pesqueros.

La parte norteamericana argumenta en relación a este problema que el atún es una especie altamente migratoria que viene desde el norte y alcanza su plena madurez en los mares mexicanos, por lo que los norteamericanos tienen derecho a pescarlo en aguas del Golfo de México.

CARIBE GRANADA

A mediados del mes de noviembre, el dirigente del Movimiento Patriótico Maurice Bishop, Kendrick Radix, cuestionó la integridad del proceso electoral que se desarrolla en esa isla, donde están previstas las elecciones generales para el 3 de diciembre.

El dirigente granadino del MPMB denunció reiteradamente en medios de prensa caribeños que las autoridades norteamericanas de ocupación respaldan al Nuevo Partido Nacional y que además Washington les brinda apoyo

financiero. Expresó asimismo su desconfianza por el funcionamiento de la comisión electoral y. por las irregularidades que la afectan desde que el gobernador, Paul Scoon, decidió la sustitución de su Presidente y el despido por oposición a esa medida de más de 20 empleados de dicha comisión. El Movimiento Patriótico Maurice Bishop sostiene que en torno a estas medidas giran los intereses norteamericanos y de sus aliados del Caribe Oriental, quienes auspiciaron la creación del Nuevo Partido Nacional (NPN). En vísperas de las elecciones del 3 de diciembre, llegaron a Granada cerca de 200 efectivos armados procedentes de Barbados y de cinco islas del Caribe Oriental. Estas fuerzas se unificaron con las tropas caribeñas y norteamericanas presentes en territorio granadino desde la invasión. la presencia de este nuevo contingente se justifica como medida de precaución ante eventuales brotes de violencia durante las elecciones.

El propio 3 de diciembre, después de concluir en la Cumbre de Jefes de Gobierno de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) la Primera Ministra de Dominica declaró a la prensa de Castries que las tropas de ocupación podrán permanecer en Granada si así lo solicita el nuevo gobierno que sea elegido en esa isla.

Esta posición fue interpretada por analistas caribeños como la continuidad de la línea trazada por los Estados Unidos en torno a la llamada seguridad de la región, que contempla la firma de acuerdos militares bilaterales entre el gobierno de los Estados Unidos y las naciones del Caribe, a fin de conformar un ejército patrocinado, adiestrado y equipado por el Pentágono.

Es importante destacar que aunque los Estados Unidos mantuvieron priorizado durante el reforzamiento de su presencia y control militar en la región, al propio tiempo han tenido que confrontar serias contradicciones con países como Guyana, Trinidad Tobago, Bahamas y Surinám, que han mantenido su oposición a la escalada militar norteamericana en la región caribeña.

El 4 de diciembre el portavoz del Departamento de Estado, Alan Romberg, felicitó a nombre de la Casa Blanca al Nuevo Partido Nacional, al cual calificó de preferido de la inmensa mayoría votante en Granada. Por su parte, el presidente Ronald Reagan, en una declaración escrita, expresó que “Estados Unidos está orgulloso de haber participado en la vuelta de Granada a la democracia” con el envío de tropas a invadir a la isla el pasado año, y anunció que mantendrá “una estrecha colaboración con el nuevo gobierno” de la isla.

Ese propio día, en declaraciones públicas, Larry Speakes indicó que Washington no ha desempeñado ningún papel en las elecciones granadinas. Sin embargo, esta información se contradice con las revelaciones publicadas el 3 de diciembre, por un diario de Bridgetown, Barbados, donde el exfuncionario de la Casa Blanca, Morrison Blackwell, reveló que los Estados

Unidos habían enviado a Granada expertos en publicidad y campaña electoral para asesorar al Nuevo Partido Nacional (NPN) con el objeto de permitirle objetar la mayoría parlamentaria para convertirse en gobierno.

Blackwell afirmó además que junto a los expertos mencionados, la Casa Blanca envió 12 millones de dólares para financiar la campaña de Blaize, candidato por el NPN, que resultó triunfador en las elecciones de Granada. Por su parte, desde Jamaica, el primer ministro Edward Seaga admitió ante la prensa de su país que su gobernante Partido laborista también brindó apoyo técnico y material a NPN de Granada durante varios meses.

REPÚBLICA DOMINICANA

A fines del trimestre el gobierno de los Estados Unidos donó a ese país 50 millones de dólares para allanar las negociaciones con el FMI.

Según expresó la fuente, la administración Reagan reveló algunos tópicos contenidos en la llamada Carta de Intenciones preparada por una comisión del FMI, que estipula duras medidas de ajuste a aprobar por el Congreso dominicano como requisito para la firma de un convenio.

Las proposiciones adelantadas generan una nueva subida de precios en los artículos de primera necesidad y otros impuestos y reajustes en el presupuesto nacional, lo cual ha sido rechazado por la oposición e incluso por algunos sectores oficialistas.

Según medios de prensa, Washington está poniendo en juego toda su influencia económica para evitar que este estratégico aliado caiga víctima de una conmoción social y para de paso coadyuvar a los intereses del FMI que controla.

El gobierno de Santo Domingo está obligado a llegar a un acuerdo con el FMI para renegociar su deuda, cuyos intereses, sólo para el 85, ascienden a 467 millones de dólares. Además podrá recibir del FMI préstamos por 100 millones de dólares más.

El nuevo acuerdo con el FMI desatará un proceso inflacionario indetenible en la República Dominicana y nuevas protestas sociales.

BELICE

En el mes de noviembre, el primer ministro beliceño, George Price, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas para el 14 de diciembre. Estas serán las primeras elecciones generales que tendrán lugar tras la independencia de Gran Bretaña.

El 15 de diciembre se conoció que Manuel Esquivel, del Partido Democrático Unido (PDU), resultó ganador en las elecciones y se informó que el 15 de

diciembre Esquivel sería investido como Primer Ministro de Belice por la gobernadora general británica, Mirta Gordon.

AMÉRICA DEL SUR VENEZUELA

En los primeros días del mes de diciembre viajó a los Estados Unidos el presidente venezolano, Jaime Lusinchi, en visita oficial por cinco días en cumplimiento de la invitación que le hiciera el presidente norteamericano Ronald Reagan.

En la reunión entre ambos mandatarios se trataron problemas relativos al endeudamiento externo latinoamericano, las relaciones bilaterales y la situación centroamericana. Con relación a este último aspecto, las conversaciones giraron en torno a las iniciativas del Grupo de Contadora, del cual Venezuela forma parte, y en particular a las incidencias que tuvieron para esa instancia regional las objeciones al Acta Revisada para la Paz y Cooperación en Centroamérica.

El mandatario venezolano viajó a los Estados Unidos acompañado del Ministro de la Secretaría de la Presidencia, así como de los ministros de Hacienda, Energía y Minas, Agricultura y Cría y Relaciones Exteriores. Además por los presidentes de la organización empresarial FEDECAMARAS y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), así como los titulares de las Comisiones de política exterior del Senado.

COLOMBIA

El 29 de noviembre el presidente de Colombia, Belisario Betancur, se entrevistó en la ciudad de Cartagena con el embajador de los Estados Unidos para Centroamérica, Harry W. Schlaudeman, según se informó a través de un escueto comunicado emitido por el palacio de gobierno de ese país.

En la entrevista, en la cual también participó el canciller colombiano Augusto Ramírez, el presidente colombiano señaló que durante la reunión se abordaron diversos temas especialmente relacionados con el proceso de paz de América Central y las gestiones del Grupo de Contadora, al que Colombia pertenece.

ECUADOR

En la primera quincena de este trimestre se anunció oficialmente en ese país la imposibilidad de pagar vencimientos por 400 millones de dólares de su deuda externa, que vence el próximo año. La situación económica por la que atraviesa Ecuador, al igual que el resto de los países latinoamericanos, se hace más crítica.

Durante el mes de diciembre se produjo la visita del general Paul Francis Gorman, comandante en jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con sede en Panamá.

En fuentes diplomáticas se comentó que la visita tenía como objeto estrechar los lazos de amistad existentes entre las instituciones castrenses de ambos países.

Gorman viajó invitado a ese país por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, vicealmirante Santiago Coral, y sostendría visitas con el presidente León Febres Cordero, el Ministro de Defensa ecuatoriano y los respectivos jefes de la marina, el ejército y la aviación.

BOLIVIA

A principios de mes de octubre, el Ministro de Finanzas de este país regresó de los Estados Unidos luego de sostener una ronda de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial en torno a los problemas de la deuda externa boliviana. Se anunció que posteriormente arribaría al país una delegación de ambos organismos financieros.

El 27 de octubre, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Finanzas de este país, Francisco Belmonte, declaró que el gobierno boliviano estudia los parámetros políticos y económicos que servirán de base para afrontar una negociación del pago de su deuda externa.

Belmonte expresó que “la renegociación con los acreedores buscará preservar el capital interno” y añadió que el estudio inherente está a cargo de la Comisión de la Deuda Externa, creada recientemente por el gobierno. El funcionario planteó que en el plano político esa comisión trata de definir las prioridades del tratamiento de la deuda, tomando en cuenta el conjunto de acreedores de diferente índole. En el campo económico, explicó, el estudio se refiere al análisis de las opciones que permitan efectuar planteamientos concretos, bajo conceptos de soberanía nacional y fundamentalmente la soberanía financiera y la dignidad del pueblo boliviano.

En los primeros días de noviembre el secretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos, Kenneth Dam, se entrevistó con distintas instancias del gobierno boliviano (Presidente Vicepresidente y directivos de las cámaras de senadores y diputados) y además con dirigentes de la oposición política, empresarial y militares.

Después de su entrevista con Siles Suazo. Kenneth Dam anunció que los Estados Unidos estudian nuevos programas de cooperación para Bolivia. Entre los temas abordados en las distintas entrevistas, Kenneth abarcó la ayuda estadounidense a Bolivia, reiteró su respaldo al gobierno de Siles y elogió la lucha del gobierno contra el narcotráfico.

El supuesto objetivo central de la visita fue ver el papel de Estados Unidos en la estabilización del proceso constitucional de Bolivia y comentar una recuperación económica saneada. Para algunos observadores llamó la atención que esta visita se produjera un día antes de las elecciones norteamericanas. Kenneth Dam es el funcionario —hasta ese momento— de más alto nivel que ha visitado Bolivia durante el período presidencial del presidente Siles Suazo. El 10 de noviembre, el agregado militar de los Estados Unidos en Bolivia, John Tudela, fue declarado persona no grata por el gobierno boliviano, según se informó oficialmente.

Voceros del Ministerio de Defensa indicaron que la medida fue adoptada con motivo de críticas realizadas por Tudela sobre las recientes designaciones de comandantes de las Fuerzas Armadas de ese país.

Se supo que la Cancillería boliviana no logró notificar a la Embajada norteamericana la decisión de su gabinete, lo que le permitió al funcionario abandonar precipitadamente el país “en uso de sus vacaciones”.

El 18 de diciembre se informó que el presidente Siles Suazo recibió al secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado norteamericano, Richard Holwill. En la entrevista estuvo presente el embajador norteamericano Edwin Corro. Según se anunció, la conversación giró sobre temas nacionales y se produjo un intercambio de opiniones e informaciones.

Un comunicado de la Embajada norteamericana en ese país informó que Holwill se entrevistará también con dirigentes de la empresa privada y con algunos representantes de los partidos políticos de oposición.

PERÚ

En el ámbito de las relaciones bilaterales entre estos dos países se han mantenido latentes las contradicciones surgidas en los trimestres anteriores y no se presentaron variaciones en el status.

BRASIL

El 12 de diciembre se reanudaron en Washington las negociaciones con vista a reducir la entrada de acero brasileño a los Estados Unidos.

Coincidentemente con el inicio de esta reunión, el presidente de Brasil, Joao B. Figueiredo, envió una carta personal al presidente norteamericano Ronald Reagan solicitando un trato justo para el acero brasileño en el mercado norteamericano.

Brasil vende actualmente más de un millón 200 000 toneladas de acero a los Estados Unidos. La administración norteamericana quiere reducir las ventas

brasileñas a sólo 600 000 toneladas, eso representaría para ese país la pérdida de más de 500 000 dólares.

El 18 de diciembre se suscribió en Washington un acuerdo bilateral para las exportaciones de acero de Brasil a los Estados Unidos.

Después de difíciles negociaciones, el convenio aprobó un complejo sistema de “restricción voluntaria” de exportaciones en los próximos cinco años. El acuerdo inicialmente le permitirá al Brasil aumentar sus exportaciones de acero para 1985 en un 19,29% en relación a 1983, llegando a un total de un millón 484 000 toneladas.

El acuerdo disminuye en un 45% el volumen de ventas de las siderúrgicas estatales de Brasil pero se compensa con la entrada de 400 millones de toneladas de acero semiacabado.

Los Estados Unidos querían reducir la cuota a sólo 460 000 toneladas.

El acuerdo, calificado como mejor de lo esperado, contempla que sus términos pueden ser revisados cada tres meses, si se establecen condiciones diferentes con otros abastecedores como Argentina, España y Corea, lo que fue calificado por algunas fuentes noticiosas como una victoria discutible para el Brasil.

ARGENTINA

Con motivo de la reelección del presidente norteamericano Ronald Reagan, en el mes de noviembre el canciller argentino, Dante Caputo, afirmó en Buenos Aires que la reelección de Reagan fortalecerá el trato bilateral entre ambas naciones. El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Frank Ortiz, se expresó en términos similares y expresó que las actuales relaciones entre ambos países son extremadamente buenas. Ortiz agregó que entre dos naciones democráticas siempre hay un entendimiento muy profundo y un diálogo permanente.

PARAGUAY

Durante este trimestre el hecho más significativo fue la visita que realizara a ese país el director de la oficina para el Cono Sur del Departamento de Estado norteamericano, Robert Morley. Esta visita de carácter extraoficial tuvo una duración de tres días y formó parte de la gira privada que realizara por los países de la región.

Según se informó en la capital Asunción, Morley realizó contactos extraoficiales con funcionarios del gobierno, políticos opositores al régimen, así como con hombres de negocios. Aunque no se divulgaron detalles de las conversaciones mantenidas por el funcionario estadounidense, fuentes

políticas dijeron que se habían tratado aspectos relativos a las posibilidades de dar pasos hacia una democracia representativa.

URUGUAY

El 7 de diciembre el embajador norteamericano en Montevideo, Thomas Jr. Aranda, comunicó a las autoridades uruguayas la decisión del gobierno de los Estados Unidos de reducir la importación de productos textiles de ese país. Esta decisión norteamericana está basada en que la importación de textiles a los Estados Unidos produce “distorsión” en el mercado interno norteamericano.

El volumen de las exportaciones de productos textiles a ese país asciende actualmente a poco más de cuatro millones de dólares anuales, por lo que los políticos y los empresarios locales no comprenden como una cifra tan exigua pueda causar problemas a los industriales norteamericanos. Esta medida ha causado un evidente malestar en medios políticos y empresariales industriales, así como el rechazo de los obreros de esa industria.

Milton Reyes, secretario ejecutivo de la Unión de Exportadores Uruguayos, calificó de “tres veces torpe” el acuerdo de las autoridades de Washington. Reyes, en declaraciones a la prensa local, recordó que el hecho se produce “cuando asume al país un gobierno democrático”. También Reyes se preguntó: “¿qué es lo que se pretende, aumentar los préstamos de capital, se pretende solamente vender armas o dar oportunidades de trabajo para que estos países puedan escapar a las duras crisis que enfrentan?”

La prensa uruguaya reaccionó contra la decisión norteamericana. *El matutino El Día* y el periódico *La Hora* se hicieron eco de esta repulsa general.

CHILE

Durante el trimestre que tratamos han continuado las discretas presiones norteamericanas en la búsqueda de un viraje del régimen de Pinochet que implique una transición hacia el proceso democrático, sin que ello signifique la falta de apoyo político y económico al régimen represivo.

En el mes de octubre dos funcionarios del Departamento de Estado realizaron una visita que fue calificada por algunas agencias informativas como de carácter privado y de orientación y conocimiento de la realidad chilena. El encargado de los asuntos de Chile, David Deloughy, y el subjefe del área del Cono Sur del Departamento de Estado, David Cox, se entrevistaron con Juan de Dios Carmona, Andrés Allamand, Federico Willoughby y otros dirigentes del derechista Acuerdo Democrático Nacional (ADENA). También se reunieron con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

El diario chileno *El Mercurio* afirmó que los representantes del Departamento de Estado norteamericano hicieron consultas sobre el supuesto proceso de apertura política y la actividad de los partidos, fundamentalmente del Partido Comunista Chileno.

En el mes de noviembre agencias noticiosas internacionales informaron que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordó un nuevo préstamo a Chile por 35 millones 700 000 dólares como antesala a la moratoria adelantada para el pago de amortizaciones de la deuda externa, aprobada por la banca acreedora con el visto bueno del FMI.

En ambos casos, los Estados Unidos tuvieron el poder de decisión por ser los principales accionistas del BID y los acreedores individuales más fuertes que tiene el régimen chileno.

Los principales bancos extranjeros que prestaron a Chile buena parte de los 22 millones de su deuda externa, son norteamericanos. Por otra parte, el accionista mayor del FMI y por tanto determinante en la política recesiva y antipopular, es los Estados Unidos.

La decisión del BID y la banca acreedora fue recibida con beneplácito por Pinochet, quien anunció que su gobierno cumplirá con todos los compromisos monetarios internacionales contraídos para asegurar el equilibrio financiero del país.

Este apoyo financiero de los Estados Unidos al régimen chileno se enmarca en la política de apoyo político y económico que recibe este régimen y contrasta marcadamente con el fortalecimiento cada vez más generalizado de la protesta interna antigubernamental.

El 10 de diciembre el embajador de los Estados Unidos en Santiago de Chile, James Theberge, informó que no hay ningún interés de parte del gobierno de los Estados Unidos de proponer fórmulas o de apoyar o rechazar recetas para solucionar los problemas internos chilenos, que son únicamente responsabilidad del gobierno.

Estas declaraciones fueron emitidas por el funcionario diplomático después de haber sostenido una entrevista con el canciller de ese país, Jaime del Valle.

A pesar de las declaraciones, recientemente el Departamento de Estado expresó su preocupación por la situación interna chilena, especialmente después de la implantación del estado de sitio desde el mes de noviembre de 1984.

Significativas fueron las declaraciones emitidas por Stephens Boswerth, funcionario del Departamento de Estado y director del Departamento de Planificación, quien sostuvo una primera reunión de trabajo, el 14 de diciembre, con funcionarios de la Cancillería chilena de acuerdo al sistema de consultas existentes entre ambos gobiernos.

Terminada la entrevista con el canciller chileno, Jaime del Valle, Boswarth declaró que “nosotros estamos interesados en ver una transición de paz y una transición sobre la cual el pueblo chileno tenga la oportunidad de establecer los detalles”. Añadió que el gobierno de su país ha expresado reiteradamente su interés en el proceso chileno de transición hacia la democracia y que los Estados Unidos están en una posición de apoyo a estos objetivos.